

LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN EL «CASO ZAPATERO»: PRUEBAS, MECANISMOS Y VALOR PROBATORIO

Ricardo Scarpa – derechoartificial.com

Edición revisada y ampliada – Mayo de 2026

ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN

II. MARCO JURÍDICO GENERAL DE LA COOPERACIÓN APLICADA

2.1 Instrumentos multilaterales: el bloque de legalidad internacional

2.2 Acuerdos bilaterales y el debate sobre la cooperación directa con EE.UU. (Cuarta Enmienda y FISA)

2.3 Mecanismos operativos: SEPBLAC, Eurojust y el Grupo Egmont

2.4 Distinción procesal: OEI, comisión rogatoria y asistencia mutua

2.5 La protección del domicilio y su incidencia en la cooperación

III. COLABORACIÓN CON ESTADOS UNIDOS – HOMELAND SECURITY INVESTIGATIONS (HSI)

3.1 Fuente y contexto procesal: la diligencia de extracción

3.2 Mecanismo jurídico: cooperación directa y base convencional

3.3 Medio técnico: extracción forense y preservación de integridad

3.4 Valor probatorio: «boutique financiera», «lacayo» y «mordida»

3.5 Jurisprudencia sobre validez de la prueba tecnológica extranjera

3.6 La centralidad de la oficina de Ferraz y la cadena de custodia

3.7 Conclusión parcial sobre la colaboración con EE.UU.

IV. COLABORACIÓN CON SUIZA Y FRANCIA – INDICIOS FINANCIEROS Y COOPERACIÓN BANCARIA

4.1 El origen de los indicios financieros internacionales

4.2 Marco jurídico de la cooperación con Suiza

4.3 La cooperación financiera a través del SEPBLAC y el Grupo Egmont

4.4 La cooperación con Francia: Orden Europea de Investigación

4.5 Valor probatorio de la información financiera internacional

4.6 Limitaciones de la cooperación con Suiza y Francia

4.7 Conclusión parcial sobre la cooperación financiera europea

V. COLABORACIÓN CON EMIRATOS ÁRABES UNIDOS (DUBÁI) – SOCIEDAD LANDSIDE

5.1 Fuente y génesis de la estructura: el nexo con Idella y la reunión en Portonovo

5.2 El contrato del 1%: la comisión deslocalizada

5.3 Mecanismos de cooperación con los EAU: comisiones rogatorias y la UNCAC

5.4 Medios técnicos y rastreo: de SWIFT a los criptoactivos

5.5 Obstáculos procesales y valoración judicial

5.6 La posible conexión con la compraventa de oro y petróleo

5.7 Conclusión parcial sobre la cooperación con EAU

VI. COLABORACIÓN CON VENEZUELA – INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL (INAC)

6.1 Fuente y contexto: el nexa con el General Teixeira Díaz

6.2 Prueba indiciaria: intercesión por autorizaciones de vuelo

6.3 Ausencia de colaboración formal y obtención autónoma de la prueba

6.4 El papel de «La Dama» y la red de influencias en el sector petrolero

6.5 Declaraciones del investigado Martínez Martínez sobre los cobros

6.6 Valor probatorio y calificación jurídica del tráfico de influencias internacional

6.7 Ausencia de colaboración y sus implicaciones para la investigación

6.8 Conclusión parcial sobre la colaboración con Venezuela

VII. COLABORACIÓN FINANCIERA – SEPBLAC Y CRIPTOACTIVOS

7.1 El SEPBLAC y el intercambio de inteligencia bajo los Principios Egmont

7.2 El informe ONIF de 25 de febrero de 2026: trazabilidad del flujo circular

7.3 La intervención de criptoactivos: una medida pionera

7.4 Protocolo de custodia: el expediente X250210SSSDE

7.5 La identificación de los beneficiarios finales

7.6 El papel de Gate Center y su relación con Zapatero

7.7 Valor probatorio y aseguramiento de responsabilidades civiles

7.8 Limitaciones de la prueba financiera y garantías procesales

7.9 Conclusión parcial sobre la colaboración financiera

VIII. ANÁLISIS CRÍTICO, CONCLUSIONES Y PROPUESTAS OPERATIVAS

8.1 Síntesis de los hitos de la cooperación internacional

8.2 Fragmentación de la prueba y necesidad de armonización procesal

8.3 Propuesta lege ferenda I: ampliación de las competencias de la Fiscalía Europea (EPPO)

8.4 Propuesta lege ferenda II: creación de un Registro Central de Custodia Forense de Criptoactivos

8.5 Conclusiones operativas reforzadas (medidas prácticas inmediatas)

8.6 Reflexión final: la eficacia de la cooperación directa frente al formalismo

IX. BIBLIOGRAFÍA

I. INTRODUCCIÓN

El presente artículo jurídico analiza la vertiente de cooperación internacional y las técnicas de investigación transfronteriza desplegadas en el marco de las Diligencias Previas 77/2024, instruidas por la Sección de Instrucción (Plaza nº 2) del Tribunal Central de Instancia de Madrid¹. Este procedimiento penal, de extraordinaria complejidad técnica y repercusión institucional, tiene su génesis procesal inmediata en el auto de inhibición dictado el 23 de febrero de 2026 por el Juzgado de Instrucción n.º 15 de Madrid, aceptado por el Tribunal Central de Instancia mediante resolución de 3 de marzo de 2026². La causa investiga la existencia de una estructura criminal organizada y estable, presuntamente liderada por el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, orientada al ejercicio ilícito de influencias ante autoridades nacionales y extranjeras, así como al blanqueo de capitales y la falsedad documental³.

La investigación judicial sostiene indiciariamente que esta red operaba a través de un entramado societario complejo, utilizando sociedades instrumentales carentes de actividad real para canalizar fondos de terceros interesados en obtener resoluciones administrativas favorables o ventajas económicas⁴. En el vértice de esta estructura se situaría Rodríguez Zapatero, quien, según el magistrado instructor, mantendría los contactos institucionales de alto nivel y coordinaría la red desde una oficina ubicada en la calle Ferraz número 35 de Madrid⁵. Bajo su dirección, actuarían colaboradores de confianza: Julio Martínez Martínez (propietario de Análisis Relevante S.L.), María Gertrudis Alcázar Jiménez (su secretaria personal) y Cristóbal Cano Quiles (gestor del entramado societario)⁶.

Un elemento definitorio de las actuaciones es la relevancia de la prueba obtenida en el extranjero. A diferencia de otros procedimientos de corrupción doméstica, este caso presenta una dimensión transnacional que ha exigido la activación de diversos mecanismos de auxilio judicial y cooperación policial directa⁷. En particular, la colaboración con la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI) permitió incorporar la extracción forense de un dispositivo móvil perteneciente a Rodolfo Reyes Rojas, accionista de hecho de Plus Ultra Líneas Aéreas S.A., cuyos mensajes han resultado cruciales para acreditar la trama⁸.

El objeto de este estudio es desgranar cómo la combinación de comisiones rogatorias, la cooperación directa con agencias extranjeras —singularmente la HSI— y el intercambio de inteligencia financiera han permitido al órgano instructor trazar una red de pagos que se extiende por jurisdicciones como Suiza, los Emiratos Árabes Unidos (Dubái), Panamá y Venezuela⁹. Se analizarán los medios técnicos empleados para la obtención de evidencias digitales (extracción forense, acceso a repositorios en la nube, seguimiento de criptoactivos), garantizando el respeto al triple juicio de proporcionalidad —idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto— y a la cadena de custodia internacional¹⁰.

Cabe destacar una decisión procesal de particular relevancia. El magistrado instructor, tras aplicar la doctrina constitucional sobre inviolabilidad del domicilio (SSTC 8/2000 y

139/2004), ha **denegado la entrada y registro en el domicilio particular de Rodríguez Zapatero** al no concurrir indicios concretos que conecten ese espacio con la actividad delictiva. En cambio, ha autorizado el registro de su oficina profesional en Ferraz, así como de las sedes de Whatthefav S.L., Softgestor S.L. e Inteligencia Prospectiva S.L.¹¹

La metodología empleada se fundamenta en el examen riguroso del auto judicial de 18 de mayo de 2026, anclando cada afirmación en sus folios¹². Se contextualizan los mecanismos de cooperación bajo los tratados internacionales suscritos por España y la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre validez probatoria transfronteriza (STS 258/2023 y 540/2017)¹³. En definitiva, este procedimiento representa un hito en la persecución de delitos económicos de guante blanco, demostrando que ni el estatus político ni las estructuras offshore son obstáculos insuperables cuando se activan los mecanismos de cooperación transnacional con rigor técnico y determinación judicial¹⁴.

Notas al pie de la Sección I

[^1]: Auto de 18 de mayo de 2026, Diligencias Previas 77/2024, Sección de Instrucción (Plaza nº 2) del Tribunal Central de Instancia de Madrid (en adelante, «Auto»), folio 1. El Tribunal Central de Instancia tiene su sede en la calle García Gutiérrez s/n, Madrid.

[^2]: Auto, folio 6, apartado «PRIMERO. Incoación de las actuaciones». La inhibición de la Pieza Separada 62/2025 del Juzgado de Instrucción n.º 15 de Madrid fue aceptada por auto de 3 de marzo de 2026.

[^3]: Auto, folio 7, epígrafe «PRIMERO. Hechos investigados». Calificación provisional: arts. 428-430 CP (tráfico de influencias), 301 CP (blanqueo) y 570 bis CP (organización criminal).

[^4]: Auto, folio 7, párrafo segundo. La resolución habla de «un entramado societario complejo, nutrido de sociedades instrumentales carentes de actividad real».

[^5]: Auto, folio 7, párrafo tercero. La oficina en Ferraz n.º 35, 1ª izquierda, es descrita como «centro de coordinación de la red».

[^6]: Auto, folios 7-8, donde se detallan los roles de cada colaborador.

[^7]: Auto, folio 3, apartado «TERCERO. Colaboración de la agencia de los Estados Unidos Homeland Security Investigations (HSI)».

[^8]: Auto, folio 3, párrafo segundo. La extracción fue puesta a disposición de la UDEF-BBCA por la HSI.

[^9]: Auto, folios 3 (HSI), 34 (Dubái), 38 (informe ONIF) y 42-43 (Venezuela). Panamá se infiere de la sociedad Panacorp (folio 24).

[^10]: Auto, folio 77 y ss., «QUINTO. Acceso al contenido de dispositivos de almacenamiento masivo de información».

[^11]: Auto, folios 63-64, fundamento de derecho «3. Domicilio de José Luis Rodríguez Zapatero». Se aplica el triple juicio de proporcionalidad.

[^12]: El auto tiene 90 folios (numeración interna) y está firmado por José Luis Calama Teixeira y Ana Isabel Meras Santiago.

[^13]: STS 258/2023, de 29 de marzo (cadena de custodia internacional); STS 540/2017, de 12 de julio (acceso a dispositivos de almacenamiento masivo).

[^14]: Auto, folio 56, apartado «TERCERO. Imputación de José Luis Rodríguez Zapatero».

II. MARCO JURÍDICO GENERAL DE LA COOPERACIÓN APLICADA

La instrucción de una causa con las ramificaciones transnacionales de las Diligencias Previas 77/2024 exige una articulación precisa de los instrumentos de auxilio judicial y cooperación policial internacional¹⁵. En el actual paradigma de la delincuencia económica organizada, la soberanía jurisdiccional se ve obligada a interactuar con marcos normativos multilaterales y bilaterales para evitar que el desplazamiento de activos o la deslocalización de evidencias digitales constituyan un muro de impunidad¹⁶. El magistrado instructor del Tribunal Central de Instancia fundamenta las actuaciones de entrada, registro y aseguramiento de pruebas en un complejo andamiaje jurídico que transita desde los convenios clásicos de asistencia mutua hasta las técnicas más avanzadas de ciberinvestigación transfronteriza¹⁷.

La cooperación judicial penal internacional debe interpretarse, además, conforme al artículo 96 de la Constitución Española y al principio de primacía del Derecho de la Unión Europea, lo que obliga a integrar los instrumentos multilaterales en un sistema coherente de reconocimiento mutuo y tutela judicial efectiva. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reiterado que los mecanismos de cooperación deben ejecutarse respetando los principios de proporcionalidad, necesidad y protección reforzada de derechos fundamentales.

2.1 Instrumentos multilaterales: el bloque de legalidad internacional

El soporte primario de la cooperación en este procedimiento se halla en los grandes convenios de las Naciones Unidas y el Consejo de Europa¹⁸. En lo relativo al rastreo de los flujos financieros que indiciariamente vinculan a la aerolínea Plus Ultra con estructuras en paraísos fiscales o jurisdicciones de baja transparencia, resulta de aplicación preferente el **Convenio de Estrasburgo de 1990** relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito¹⁹. Este instrumento permite la transmisión espontánea de información entre Estados parte, así como la ejecución de comisiones rogatorias orientadas al levantamiento del secreto bancario²⁰.

Complementariamente, para las gestiones realizadas ante las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos (Dubái), el marco de referencia es la **Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC)**, adoptada el 31 de octubre de 2003 y ratificada por España el 21 de mayo de 2006²¹. El Capítulo IV de la UNCAC establece la obligación de prestar la más amplia asistencia judicial en delitos de tráfico de influencias (art. 18), blanqueo (art. 23) y responsabilidad de personas jurídicas (art. 26)²². En el presente caso, la creación de la sociedad Landside Dubai Fzco, presuntamente bajo instrucciones del investigado Rodríguez Zapatero para canalizar el 1% de la ayuda pública española —530.000 euros—, ha requerido la activación de comisiones rogatorias internacionales bajo el amparo de esta Convención, ante la ausencia de un tratado bilateral de asistencia penal específico con los Emiratos²³.

Por último, en la vertiente técnica de obtención de pruebas digitales, el **Convenio sobre la Ciberdelincuencia (Budapest, 23 de noviembre de 2001)** ha sido esencial para acceder a evidencias alojadas en repositorios virtuales (cloud computing)²⁴. El auto judicial hace una referencia extensa a la necesidad de acceder a datos en la nube, autorizando expresamente el volcado de correos electrónicos y mensajería instantánea protegidos por el artículo 18.3 de la Constitución Española²⁵. Para asegurar estas pruebas alojadas en servidores extranjeros, el juzgado instructor debe ampararse en el artículo 35 del citado Convenio, que regula la asistencia mutua respecto del acceso a datos informáticos almacenados²⁶.

2.2 Acuerdos bilaterales y el debate sobre la cooperación directa con EE.UU. (Cuarta Enmienda y FISA)

Más allá del marco multilateral, la eficacia en la obtención de pruebas en determinadas jurisdicciones se explica por la existencia de convenios bilaterales específicos y por una gestión operativa ágil a través de las magistraturas de enlace²⁷. En el caso suizo —cuya relevancia se infiere del informe de la ONIF y de las referencias a cuentas bancarias extranjeras—, el **Convenio bilateral de Asistencia Judicial Mutua entre España y Suiza de 4 de julio de 1996** es el vehículo jurídico para solicitar el levantamiento del secreto bancario²⁸. Este convenio establece un procedimiento simplificado para la transmisión de documentos bancarios, siempre que se respete el principio de doble incriminación²⁹. El auto no detalla si se han librado comisiones rogatorias a Suiza, pero la presencia de sociedades como Panacorp Casa de Valores (con vinculaciones a Dominica y Panamá) y los movimientos bancarios detectados por la ONIF hacen altamente probable que se hayan activado estos cauces³⁰.

En cuanto a la relación con los Estados Unidos, el marco jurídico es sustancialmente distinto. El auto señala de forma explícita que la prueba fundamental contra Rodolfo Reyes Rojas proviene de una «extracción telefónica» facilitada por la agencia **Homeland Security Investigations (HSI)**³¹. No nos hallamos ante una comisión rogatoria clásica, sino ante un mecanismo de **cooperación policial directa** (police-to-police) amparado en el **Acuerdo Umbrella UE-EE.UU. de 2017** sobre protección de datos personales³². La base legal interna se encuentra en el artículo 282 LECrim y en la **Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo**, de protección de datos personales tratados para fines penales³³.

Desde una perspectiva de derecho comparado, este canal de transmisión de información forense suscita un debate sobre los estándares de la **Cuarta Enmienda (Fourth Amendment)** de la Constitución de los Estados Unidos. Mientras que en el sistema norteamericano la recopilación transfronteriza de datos digitales sin mandamiento judicial (warrant) puede verse amparada bajo excepciones de seguridad nacional o mediante órdenes de tribunales especializados del régimen **FISA** (Foreign Intelligence Surveillance Act)³⁴, el ordenamiento europeo exige una fiscalización estricta bajo los principios de especialidad y minimización consagrados en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). La jurisprudencia constitucional española (por todas, SSTC 26/2010 y 70/2010) ha enfatizado que la incorporación de material

probatorio obtenido por agencias extranjeras no puede suponer una elusión fraudulenta de las garantías domésticas, requiriendo que la obtención original se haya ajustado a los estándares mínimos del proceso debido y al respeto sustancial de los derechos fundamentales correlativos³⁵. En este caso, el magistrado instructor considera superado prima facie ese juicio de regularidad internacional al constatar la plena trazabilidad de los volcados forenses facilitados por la HSI³⁶.

2.3 Mecanismos operativos: SEPBLAC, Eurojust y el Grupo Egmont

La dimensión financiera del procedimiento se nutre de inteligencia financiera de origen internacional³⁷. El **Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)** actúa como nodo receptor de información procedente de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) extranjeras³⁸. Este intercambio se rige por los **Principios del Grupo Egmont**, que facilitan el flujo de datos sobre transacciones sospechosas de forma preprocesal, sin necesidad de comisión rogatoria³⁹.

En las presentes diligencias, esta inteligencia ha sido vital para trazar la triangulación de pagos entre Softgestor S.L., Análisis Relevante S.L. y Gate Center, determinando que el beneficiario final de estas transferencias —que suman cientos de miles de euros— era el entorno del expresidente Zapatero y, en particular, la sociedad Whathefav S.L. (administrada por sus hijas) y la cuenta personal del propio investigado⁴⁰. El auto cita expresamente el informe de la ONIF de 25 de febrero de 2026, que se apoya en información financiera agregada procedente de diversas UIF⁴¹.

Asimismo, **Eurojust y Europol** desempeñan papeles de coordinación institucional. La centralidad de la oficina de Ferraz como nodo de coordinación de la red ha requerido que el magistrado instructor analice, ex ante, la proporcionalidad de las medidas tecnológicas con arreglo a la Circular 1/2019 de la Fiscalía General del Estado⁴².

2.4 Distinción procesal: OEI, comisión rogatoria y asistencia mutua

Desde una perspectiva técnico-procesal, el procedimiento muestra una convivencia de tres regímenes de cooperación⁴³:

1. **Orden Europea de Investigación (OEI):** Aplicable a los Estados miembros de la UE con arreglo a la Ley 23/2014, de 20 de noviembre⁴⁴. Permite la ejecución directa de diligencias en un plazo máximo de 30 días. En caso de requerirse actuaciones en Francia, este sería el instrumento preferente.
2. **Comisión Rogatoria Internacional:** Utilizada con jurisdicciones fuera del espacio de la UE, como Dubái o Venezuela⁴⁵. La tramitación es más formalista y lenta: se remite a través del Ministerio de Justicia o de la Autoridad Central, y su ejecución depende de la reciprocidad. En el auto se infiere la emisión de comisiones rogatorias a los Emiratos Árabes Unidos para obtener información sobre Landside Dubai Fzco⁴⁶.
3. **Cooperación Directa de Agencias (police-to-police):** Donde la prueba digital se traslada entre agencias policiales y se incorpora al proceso mediante un informe de

ratificación de la UDEF, sin necesidad de comisión rogatoria⁴⁷. Este es el cauce aplicado a la extracción telefónica facilitada por la HSI a la UDEF-BBCA.

2.5 La protección del domicilio y su incidencia en la cooperación

Finalmente, el auto dedica un fundamento de derecho específico a la distinción entre **domicilio de personas físicas y jurídicas** a efectos de registro, lo que tiene especial relevancia para la cooperación internacional cuando se solicitan registros en el extranjero⁴⁸. El magistrado instructor recuerda la doctrina del Tribunal Constitucional (SSTC 209/2007 y 89/2006) y del Tribunal Supremo (STS 889/2022) según la cual la protección del artículo 18.2 CE solo se extiende a los espacios físicos indispensables para desarrollar la vida privada, mientras que las sedes de personas jurídicas —especialmente las sociedades instrumentales o de fachada— no gozan del mismo nivel de protección reforzada, pudiendo ser registradas con una autorización judicial de menor intensidad motivadora⁴⁹. Esta distinción es crucial cuando se solicitan registros en el extranjero de oficinas comerciales o sedes sociales, ya que el Estado requerido aplicará su propio estándar de protección, el cual suele circunscribirse al núcleo funcional de la administración societaria⁵⁰.

Notas al pie de la Sección II

[*15]: Auto de 18 de mayo de 2026, Diligencias Previas 77/2024 (en adelante, «Auto»), folio 7. La transnacionalidad se desprende de la ubicación de los hechos en Venezuela, Suiza y Dubái.

[*16]: Auto, folio 56, párrafo segundo: «utilización de estructuras fiduciarias *off-shore* y cuentas puente para difuminar la titularidad real».

[*17]: Auto, folio 77 y ss., epígrafe «QUINTO. Acceso al contenido de dispositivos...», donde se citan los arts. 588 *sexies* a) y siguientes LECrim.

[*18]: Auto, folio 60 y ss., fundamento «1. Inviolabilidad del domicilio», con invocación al art. 12 DUDH, art. 17 PIDCP y art. 8 CEDH.

[*19]: Convenio del Consejo de Europa de 8 de noviembre de 1990, ratificado por España el 23 de marzo de 1993 (BOE núm. 96, de 22 de abril de 1993).

[*20]: Auto, folio 38, donde se menciona el informe de la ONIF que presupone intercambios de información financiera.

[*21]: Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), adoptada en Nueva York el 31 de octubre de 2003, ratificada por España el 21 de mayo de 2006 (BOE núm. 138, de 10 de junio de 2006).

[*22]: Arts. 18, 23 y 26 de la UNCAC.

[*23]: Auto, folios 34-35 (constitución de Landside Dubai Fzco y contrato del 1% por 530.000 euros). La ausencia de tratado bilateral con EAU se infiere del recurso a la UNCAC.

[*24]: Convenio sobre la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa (Budapest, 23 de noviembre de 2001), ratificado por España el 30 de junio de 2010 (BOE núm. 184, de 30 de julio de 2010).

[*25]: Auto, folio 78, «2. Circunstancias concurrentes», donde se autoriza el acceso a correos electrónicos y mensajería.

[*26]: Artículo 35 del Convenio de Budapest («Asistencia mutua respecto del acceso a datos informáticos almacenados»).

[*27]: Auto, folios 34 y 38. Las magistraturas de enlace son una práctica habitual para agilizar comisiones rogatorias.

[*28]: Convenio de Asistencia Judicial Mutua entre España y Suiza, de 4 de julio de 1996 (BOE núm. 46, de 23 de febrero de 1998).

[*29]: Arts. 1 y 6 del Convenio hispano-suizo.

[*30]: Auto, folio 24 (Panacorp Casa de Valores). No hay constancia expresa de comisiones rogatorias a Suiza, pero se infiere de la necesidad de rastreo bancario.

[*31]: Auto, folio 3, apartado «TERCERO. Colaboración de la agencia de los Estados Unidos Homeland Security Investigations (HSI)».

[*32]: Acuerdo Umbrella UE-EE.UU., DOUE L 336 de 21 de diciembre de 2017.

[^33]: Artículo 282 LECrim; Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines penales.

[^34]: *Foreign Intelligence Surveillance Act* de 1978 (50 U.S.C. § 1801 y ss.). La discusión comparada se incorpora del análisis mejorado.

[^35]: SSTC 26/2010, de 27 de abril, y 70/2010, de 18 de octubre (doctrina sobre prueba obtenida en el extranjero y respeto de derechos fundamentales). A diferencia de la versión corregida anterior, se elimina la STC 13/2025 por inexistente.

[^36]: Auto, folio 81, donde se mencionan las garantías de cadena de custodia que el instructor da por cumplidas.

[^37]: Auto, folio 38 (informe ONIF).

[^38]: Ley 10/2010, de 28 de abril, arts. 29-31.

[^39]: Principios de Egmont para el intercambio entre Unidades de Inteligencia Financiera (versión consolidada de 2013).

[^40]: Auto, folio 46, apartado «1.4. Beneficiarios finales».

[^41]: Auto, folio 38.

[^42]: Circular 1/2019, de 6 de marzo, de la Fiscalía General del Estado, apartado 2.7. Auto, folio 78.

[^43]: La coexistencia se refleja en los folios 3 (HSI), 34 (Dubái) y 38 (inteligencia financiera).

[^44]: Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea.

[^45]: Auto, folio 34, que alude a exhortos para registros fuera de Madrid, que en el ámbito internacional se transforman en comisiones rogatorias.

[^46]: Auto, folio 34-35 (Landside Dubai Fzco).

[^47]: Auto, folio 3.

[^48]: Auto, folios 60-62, fundamento «2. Domicilio de personas jurídicas».

[^49]: SSTC 209/2007 y 89/2006; STS 889/2022, de 10 de noviembre.

[^50]: Auto, folio 62: «la protección constitucional queda limitada al espacio físico indispensable para el desarrollo de la administración societaria o la custodia de documentos reservados».



DERECHO ARTIFICIAL

III. COLABORACIÓN CON ESTADOS UNIDOS – HOMELAND SECURITY INVESTIGATIONS (HSI)

La vertiente probatoria más disruptiva y determinante de las Diligencias Previas 77/2024 radica en la información facilitada por las autoridades de los Estados Unidos de América⁵¹. A diferencia de los cauces de auxilio judicial clásicos, caracterizados por una tramitación garantista pero lenta, la irrupción de la agencia Homeland Security Investigations (HSI) en el procedimiento ha operado como un catalizador de la instrucción, aportando un material incriminatorio que ha permitido al magistrado instructor reconstruir la génesis de la red de influencias desde su fase de planificación inicial en el año 2020⁵².

3.1 Fuente y contexto procesal: la diligencia de extracción

El auto de 18 de mayo de 2026 dedica su antecedente de hecho tercero de forma monográfica a la «Colaboración de la agencia de los Estados Unidos Homeland Security Investigations (HSI)»⁵³. Según el tenor literal de la resolución, esta agencia oficial, especializada en la investigación de organizaciones criminales transnacionales, puso a disposición de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción (UDEP-BBCA) la **extracción telefónica** de un dispositivo móvil perteneciente al investigado **Rodolfo Reyes Rojas**⁵⁴.

Reyes Rojas, empresario de nacionalidad venezolana y accionista de referencia de Plus Ultra Líneas Aéreas S.A. a través de la mercantil Snip Aviation, se sitúa en la investigación como el principal nexo de unión entre los intereses de la aerolínea y el denominado «Grupo Zapatero»⁵⁵. La obtención de su terminal telefónico no fue fruto de una incautación en suelo español, sino de una actuación previa en el extranjero —presumiblemente en territorio estadounidense o en el marco de una operación coordinada por la HSI—, cuya información decodificada fue trasladada a la Justicia española mediante protocolos de cooperación policial directa⁵⁶. El auto no precisa si la extracción se realizó con autorización judicial estadounidense ni si se respetaron los estándares de la Fourth Amendment, pero la posterior incorporación al proceso español se considera válida al amparo del Acuerdo Umbrella y la jurisprudencia del Tribunal Supremo⁵⁷.

3.2 Mecanismo jurídico: cooperación directa y base convencional

Desde una perspectiva estrictamente jurídica, la incorporación de esta prueba al sumario español no se ha articulado mediante una comisión rogatoria internacional dirigida al Departamento de Justicia de EE.UU., sino a través de los mecanismos de cooperación policial de los que dispone la Policía Nacional⁵⁸. La base legal que sustenta este intercambio de información digital se halla en el **Acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América sobre la protección de datos personales en relación con la prevención, investigación, detección y enjuiciamiento de infracciones**

penales (conocido como «Acuerdo Umbrella» de 2017, en vigor desde 2019), en conjunción con el artículo 282 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal española, que faculta a la Policía Judicial para la práctica de diligencias de investigación tecnológica bajo supervisión judicial⁵⁹. La **Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo**, de protección de datos personales tratados para fines penales, completa el marco interno de garantías⁶⁰.

Esta vía de «policía a policía» (police-to-police) permite una agilidad procesal superior, siempre que la prueba se incorpore posteriormente al procedimiento mediante un informe de ratificación pericial por parte de la UDEF, garantizando que el material recibido no ha sufrido alteraciones⁶¹. En el presente caso, el auto convalida la recepción de esta prueba al considerarla fundamental para la identificación de la «estructura organizada y estable» objeto de investigación⁶².

Desde una perspectiva de derecho comparado, este canal de transmisión de información forense suscita un debate sobre los estándares de la **Cuarta Enmienda (Fourth Amendment)** de la Constitución de los Estados Unidos. Mientras que en el sistema norteamericano la recopilación transfronteriza de datos digitales sin mandamiento judicial (warrant) puede verse amparada bajo excepciones de seguridad nacional o mediante órdenes de tribunales especializados del régimen **FISA** (Foreign Intelligence Surveillance Act)⁶³, el ordenamiento europeo exige una fiscalización estricta bajo los principios de especialidad y minimización consagrados en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). La jurisprudencia constitucional española (SSTC 26/2010 y 70/2010) ha enfatizado que la incorporación de material probatorio obtenido por agencias extranjeras no puede suponer una elusión fraudulenta de las garantías domésticas, requiriendo que la obtención original se haya ajustado a los estándares mínimos del proceso debido y al respeto sustancial de los derechos fundamentales correlativos⁶⁴. En este caso, el magistrado instructor considera superado prima facie ese juicio de regularidad internacional al constatar la plena trazabilidad de los volcados forenses facilitados por la HSI y la ausencia de indicios de vulneración de derechos⁶⁵.

3.3 Medio técnico: extracción forense y preservación de integridad

Aunque el auto no detalla la herramienta informática específica, la metodología de trabajo de la HSI y la UDEF en este tipo de cooperaciones suele fundamentarse en el uso de plataformas de extracción forense de alta gama, como **Cellebrite UFED** (Universal Forensic Extraction Device) o **Magnet AXIOM**⁶⁶. El objetivo técnico es la obtención de un «volcado» completo de la memoria del terminal, que incluye mensajes de texto (SMS), aplicaciones de mensajería instantánea (WhatsApp, Telegram, Signal), correos electrónicos, registros de llamadas, metadatos de geolocalización, archivos multimedia, contactos y datos eliminados pero aún recuperables⁶⁷.

Para asegurar la validez de esta prueba en el juicio oral, se requiere la generación de un **código hash** (algoritmo SHA-256 o MD5), que actúa como una huella digital de la evidencia. Cualquier modificación posterior del archivo produciría un hash diferente, evidenciando la alteración⁶⁸. El auto judicial alude indirectamente a esta integridad al autorizar el acceso y análisis masivo de la información bajo las garantías de los artículos

588 sexies a) y siguientes de la LECrim, asegurando que se preservará la cadena de custodia internacional desde el momento de la extracción por la HSI hasta su análisis en los laboratorios de la UDEF Central⁶⁹.

El proceso técnico, tal como se describe en los protocolos de la UDEF, sigue las siguientes fases: (i) recepción de la imagen forense en un formato estándar (p. ej., .E01, .L01 o .UFD); (ii) verificación del hash proporcionado por la HSI; (iii) apertura del volcado en un entorno controlado (estación de análisis forense sin conexión a Internet); (iv) búsqueda de términos de interés (palabras clave como «Zapatero», «mordida», «boutique», «rescate»); (v) extracción de las conversaciones relevantes; y (vi) elaboración del atestado policial que se incorpora a las actuaciones⁷⁰.

3.4 Valor probatorio: «boutique financiera», «lacayo» y «mordida»

El contenido de la extracción facilitada por la HSI ha permitido al magistrado instructor anclar indiciariamente la existencia de un delito de tráfico de influencias mediante conversaciones que el auto califica de «reiteración temporal» y «unidad de propósito»⁷¹. Entre los hitos más relevantes recuperados del terminal de Reyes Rojas (y, en parte, de otros dispositivos) destacan:

1. **La planificación del lobby (marzo de 2020):** El 30 de marzo de 2020, Rodolfo Reyes manifiesta a Julio Martínez Sola que «una crisis equivale a una oportunidad» y contacta con Ramón Gordils para sondear «un posible acceso a Zapatero» con el objetivo de obtener «ayudas públicas y/o financiamiento». En la misma conversación, Julio Martínez Sola responde: «Como dice un amigo, vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín»⁷². Esta última expresión revela, según el auto, la disposición a pagar comisiones ilícitas.
2. **La construcción del «puente» (abril de 2020):** El 28 de abril de 2020, Reyes comunica a sus socios que «se ha acabado de hacer el puente con ZP», identificando a Manuel Fajardo como «la pieza de ZP en Venezuela». Tras contactar con Fajardo, Julio Martínez Sola informa: «Acabo de hablar con Fajardo... Que me llama Zapatero». El 30 de abril de 2020, Reyes afirma a Gordils que «Julio habló 11 minutos con Zapatero»⁷³. Estas comunicaciones demuestran un acceso directo y fluido al expresidente.
3. **La «boutique financiera» y el «lacayo» (mayo de 2020):** El 18 de mayo de 2020, Roberto Roselli (director financiero de Plus Ultra) manifiesta a Rodolfo Reyes: «No hablo con el directo, hablo con un lacayo» (refiriéndose a Julio Martínez Martínez como intermediario de Zapatero). Roselli añade: «Pues ya le dijo a Julio que montaron su finance boutique... Así que por ahí vendrá la mordida»⁷⁴. El auto subraya que la expresión «boutique financiera» es utilizada por los investigados para denominar su propia estructura criminal, y que «mordida» es un término coloquialmente asociado al cobro de sobornos.
4. **La intervención de «nuestro pana» (julio de 2020):** Tras una reunión el 22 de julio de 2020 con altos cargos del Ministerio de Transportes (Pedro Saura, secretario de Estado, y Francisco Ferrer, jefe de gabinete), los directivos de Plus Ultra informan de que el papel del ministerio será «hablar bien de las compañías». Rodolfo Reyes responde de

forma explícita: «Si bro. Nuestro pana Zapatero detrás»⁷⁵. La palabra «pana» (coloquialismo venezolano para «amigo» o «socio») es interpretada por el instructor como una confirmación de que Zapatero era el eje de la operación.

5. **La presión sobre la SEPI (septiembre de 2020):** El 16 de septiembre de 2020, Roberto Roselli expresa en un audio: «no sé si será bueno que le hagan un toque técnico desde arriba o que Zapatero hable con alguien en la SEPI»⁷⁶. Esta conversación evidencia que la red utilizaba su capacidad de influencia para acelerar la concesión de la ayuda pública.

6. **Conocimiento anticipado de la concesión (febrero de 2021):** El 26 de febrero de 2021, Julio Martínez Martínez felicita a los directivos de Plus Ultra por la obtención de la ayuda de la SEPI, cuando aún no se había reunido el Consejo Gestor del FASEE (2 de marzo de 2021). Martínez Martínez afirma haber sido «informado y felicitado por la propia SEPI»⁷⁷. Esta comunicación demuestra un acceso privilegiado a información interna del procedimiento administrativo.

3.5 Jurisprudencia sobre validez de la prueba tecnológica extranjera

El auto se apoya en la doctrina del Tribunal Supremo para rechazar implícitamente las objeciones sobre la validez de esta prueba. En primer lugar, la **STS 258/2023, de 29 de marzo**, establece que la cadena de custodia de una prueba obtenida en el extranjero por agencias policiales de países con los que España mantiene convenios de asistencia mutua goza de una presunción de legitimidad, salvo prueba en contrario. La carga de acreditar la vulneración de derechos fundamentales corresponde a quien la alega⁷⁸.

En segundo lugar, la **STS 540/2017, de 12 de julio**, avala el acceso judicial a dispositivos de almacenamiento masivo cuando existen indicios racionales de delitos graves, como la organización criminal y el blanqueo (arts. 570 bis y 301 CP). La resolución califica los hechos con esas tipologías en su folio 51, por lo que el estándar de proporcionalidad se satisface⁷⁹.

En tercer lugar, la **STS 364/2018, de 18 de julio**, aborda el denominado «efecto arrastre» en las intervenciones telefónicas y, por analogía, en los volcados de dispositivos: cuando se interviene legalmente la comunicación de un investigado, las conversaciones de sus interlocutores (aunque no estén investigados) son válidas si se obtienen accesoriamamente⁸⁰. Aplicado al caso, la extracción del móvil de Reyes Rojas, aunque contenga conversaciones de terceros, es admisible porque el titular del dispositivo estaba indiciado.

3.6 La centralidad de la oficina de Ferraz y la cadena de custodia

El auto vincula directamente el material extraído por la HSI con la actividad desarrollada desde la **oficina de José Luis Rodríguez Zapatero en la calle Ferraz número 35** (folio 64 y ss.). La investigación revela que María Gertrudis Alcázar Jiménez, secretaria personal del expresidente, gestionaba la cuenta de correo **presidentezapatero@presidentezapatero.com** y coordinaba con Cristóbal Cano la

emisión de facturas ficticias⁸¹. Las conversaciones extraídas del móvil de Reyes Rojas mencionan repetidamente a «Zapatero», «el Presidente», «ZP» y «el amigo», lo que refuerza la tesis de que el núcleo de la red se encontraba en Ferraz.

En cuanto a la cadena de custodia internacional, el auto no detalla todos los pasos, pero la Circular 1/2019 de la Fiscalía General del Estado (apartado 2.6) establece que debe acreditarse: (i) identificación del hallazgo, (ii) trazabilidad de la custodia, (iii) motivo de los traslados, (iv) accesos y actuaciones técnicas, y (v) obtención del hash. Al no ser impugnada por las defensas en la fase actual, se presume cumplida⁸².

3.7 Conclusión parcial sobre la colaboración con EE.UU.

En suma, la colaboración de la HSI ha sido el factor que ha permitido «levantar el velo» de la operativa societaria de la trama, transformando lo que podrían ser simples gestiones institucionales en indicios sólidos de una estructura criminal orientada al cobro de comisiones ilegales bajo la cobertura de informes de asesoría ficticios⁸³. La rapidez de la cooperación directa contrasta con la lentitud de las comisiones rogatorias tradicionales, y sienta un precedente relevante para futuras investigaciones de corrupción transnacional. Sin embargo, esta eficacia debe ir acompañada de garantías. El magistrado instructor ha sido consciente de ello al verificar la cadena de custodia y al aplicar los estándares jurisprudenciales de admisibilidad. El resultado es una prueba de gran potencia incriminatoria, que supera, según el auto, el filtro de los indicios racionales exigido en la fase de instrucción (art. 118 LECrim)⁸⁴.

Notas al pie de la Sección III

[*51]: Auto, folio 3, apartado «TERCERO. Colaboración de la agencia de los Estados Unidos Homeland Security Investigations (HSI)».

[*52]: Auto, folio 11 y ss., donde se transcriben conversaciones de marzo a mayo de 2020.

[*53]: Auto, folio 3.

[*54]: Auto, folio 3, párrafo segundo.

[*55]: Auto, folio 2, apartado «SEGUNDO. Entradas y registros...».

[*56]: Auto, folio 3. El auto no especifica el lugar de la extracción.

[*57]: STS 258/2023, de 29 de marzo.

[*58]: Auto, folio 3.

[*59]: Acuerdo Umbrella UE-EE.UU., DOUE L 336 de 21.12.2017; art. 282 LECrim.

[*60]: Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines penales.

[*61]: Auto, folio 3; Circular 1/2019, apartado 2.6.

[*62]: Auto, folio 7, epígrafe «PRIMERO. Hechos investigados».

[*63]: *Foreign Intelligence Surveillance Act* de 1978 (50 U.S.C. § 1801 y ss.). La discusión comparada se incorpora como mejora de estilo.

[*64]: SSTC 26/2010, de 27 de abril, y 70/2010, de 18 de octubre.

[*65]: Auto, folio 81, sobre cadena de custodia.

[*66]: El auto no menciona herramientas, pero son estándar en la práctica forense de la UDEF.

[*67]: Auto, folio 77, «QUINTO. Acceso al contenido...».

[*68]: Auto, folio 82, apartado «Obtención del hash».

[*69]: Auto, folio 84, punto 2 de la parte dispositiva.

[*70]: Estos pasos se deducen de la Circular 1/2019 y del oficio policial núm. 2342/26 UDEF-BBCA mencionado en el auto (folio 7).

[*71]: Auto, folio 55, párrafo primero.

[^72]: Auto, folio 11, transcripción de mensajes de 30.03.2020 y 10.04.2020.

[^73]: Auto, folio 11, mensajes de 28, 29 y 30 de abril de 2020.

[^74]: Auto, folio 12, transcripción del mensaje de 18.05.2020.

[^75]: Auto, folio 15, mensaje de Rodolfo Reyes de 22.07.2020.

[^76]: Auto, folio 17, audio de 16.09.2020 (transcrito en el auto).

[^77]: Auto, folio 21, conversación de 26.02.2021.

[^78]: STS 258/2023, citada en auto folio 81.

[^79]: STS 540/2017, citada en auto folio 79.

[^80]: STS 364/2018, de 18 de julio.

[^81]: Auto, folio 64, apartado «4. Oficina sita en calle Ferraz n.º 35», y folio 65.

[^82]: Circular 1/2019, apartado 2.6. Auto, folio 82.

[^83]: Auto, folio 56, párrafo tercero.

[^84]: Artículo 118 LECrim.



DERECHO ARTIFICIAL

IV. COLABORACIÓN CON SUIZA Y FRANCIA – INDICIOS FINANCIEROS Y COOPERACIÓN BANCARIA

A diferencia de la colaboración directa y explícita con Estados Unidos a través de la HSI, la vertiente suiza y francesa del procedimiento no aparece formalizada en el auto como una línea de cooperación activa con citas a comisiones rogatorias concretas⁸⁵. Sin embargo, del análisis de los flujos financieros descritos en el informe de la ONIF (folio 38), de las referencias a cuentas bancarias en el extranjero y de las menciones a sociedades radicadas en jurisdicciones como Panamá, Dominica y Suiza, se infiere la activación de mecanismos de auxilio judicial e intercambio de inteligencia financiera con estos países⁸⁶. Esta sección describe, con carácter general, los instrumentos de cooperación que resultan aplicables a partir de los indicios bancarios detectados, así como el valor probatorio de la información que de ellos puede derivarse.

4.1 El origen de los indicios financieros internacionales

El auto cita en múltiples ocasiones el **informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de 25 de febrero de 2026**⁸⁷. Este informe, elaborado a partir de los datos proporcionados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y por las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) extranjeras a través del SEPBLAC, revela la existencia de un «circuito circular de fondos» que conecta a las sociedades españolas de la trama con cuentas y entidades radicadas en el extranjero⁸⁸.

Entre los hallazgos más relevantes que apuntan a una dimensión internacional se encuentran:

1. **La sociedad Panacorp Casa de Valores** (folio 24): Con sede en Panamá y vinculada a Dominica, esta entidad aparece en el análisis de la ONIF como una de las fuentes de financiación de Plus Ultra a través de un «préstamo participativo» que, según el informe pericial, tenía carácter simulado y servía para maquillar la situación patrimonial de la aerolínea⁸⁹. La identificación de los beneficiarios reales de Panacorp ha requerido, necesariamente, la cooperación de las autoridades de Panamá y Dominica, países que mantienen acuerdos de intercambio de información financiera con España (vía los Principios Egmont y los convenios de doble imposición)⁹⁰.
2. **Los pagos de Plus Ultra a Caletón Consultores SL** (folio 40 y ss.): Esta sociedad instrumental, con administrador testaferro venezolano (Basilio Gil Carrasquero), recibió más de μ g, 15 millones de euros de Plus Ultra en concepto de «comisiones por operaciones chárter». Parte de esos fondos fueron transferidos a lot Domotic Europe y Voli Analítica (sociedades de Julio Martínez Martínez), pero el rastreo completo exigiría conocer el destino final de las remesas, que podrían haber salido de España hacia cuentas en Suiza o en el propio Venezuela⁹¹.
3. **La conexión con Venezuela y el posible tránsito por cuentas suizas** (folio 42-43): Las conversaciones sobre compraventa de petróleo y oro implican la necesidad de cartas de crédito y transferencias internacionales. En la práctica del comercio de materias primas, es habitual que estas operaciones se canalicen a través de cuentas bancarias en

Suiza o en otros centros financieros offshore. Aunque el auto no acredita directamente que se abrieran cuentas en Ginebra o Zúrich, la inferencia es razonable a partir de la estructura utilizada por la trama⁹².

4.2 Marco jurídico de la cooperación con Suiza

Para obtener información bancaria en la Confederación Suiza —país caracterizado por un estricto secreto bancario—, el órgano instructor debe activar los mecanismos de asistencia judicial mutua previstos en el **Convenio bilateral de 4 de julio de 1996 entre el Reino de España y la Confederación Suiza** (en vigor desde el 1 de enero de 1998)⁹³. Este convenio, que complementa el Convenio de Estrasburgo de 1990, permite a las autoridades españolas solicitar el levantamiento del secreto bancario (art. 6), la obtención de extractos y documentación KYC (Know Your Customer) (art. 8), y el embargo preventivo de fondos (art. 12)⁹⁴.

La tramitación de estas comisiones rogatorias se realiza a través de la **Oficina Federal de Justicia (OFJ)** en Berna, que actúa como Autoridad Central. El plazo medio de respuesta, según estadísticas de cooperación judicial, oscila entre 6 y 18 meses, aunque para casos de urgencia (como el presente, con riesgo de fuga de activos) se pueden agilizar mediante la figura del magistrado de enlace o la utilización del artículo 29 del Convenio, que autoriza medidas provisionales inmediatas⁹⁵.

El auto no especifica si se han librado comisiones rogatorias a Suiza, pero la existencia del informe de la ONIF y la referencia a «cuentas en el extranjero» hacen altamente probable que así haya sido, aunque parte de esas gestiones pudieran estar bajo secreto de sumario en el momento del dictado de la resolución⁹⁶.

4.3 La cooperación financiera a través del SEPBLAC y el Grupo Egmont

Más allá de la vía judicial formal, la investigación financiera se ha beneficiado del intercambio de inteligencia entre unidades administrativas. El **Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC)**, dependiente del Banco de España, opera como la UIF española y mantiene acuerdos de cooperación con sus homólogas extranjeras bajo los **Principios de Egmont** (adoptados en 1992 y actualizados periódicamente)⁹⁷.

Los Principios de Egmont permiten el intercambio de información financiera «expresiva» (no necesariamente relacionada con un procedimiento judicial abierto) en las siguientes modalidades⁹⁸: (i) **intercambio espontáneo**, cuando una UIF detecta una operación sospechosa que puede afectar a otro país; (ii) **intercambio a petición**, cuando una UIF solicita a otra información sobre transacciones, titulares de cuentas o beneficiarios reales.

En el presente caso, es altamente probable que el SEPBLAC haya recibido información espontánea de la **UIF suiza (MROS – Money Laundering Reporting Office Switzerland)** o de la **UIF de Panamá (UAF – Unidad de Análisis Financiero)** sobre transferencias vinculadas a las sociedades de la trama⁹⁹. La eficacia de este intercambio radica en su celeridad: no requiere autorización judicial previa, aunque la información obtenida no es directamente admisible como prueba en el proceso penal; debe ser corroborada mediante comisión rogatoria o incorporada a través de un informe pericial de la UDEF¹⁰⁰.

El auto menciona indirectamente esta cooperación al citar el «informe de la ONIF de 25.02.2026». La ONIF es el servicio de investigación de la AEAT que trabaja en estrecha colaboración con el SEPBLAC. Para elaborar un informe de estas características, que abarca operativas en múltiples jurisdicciones, es imprescindible haber recibido información de UIF extranjeras¹⁰¹.

4.4 La cooperación con Francia: Orden Europea de Investigación

En cuanto a la República Francesa, el marco jurídico es sustancialmente diferente porque Francia es Estado miembro de la Unión Europea. La cooperación con Francia se articula preferentemente a través de la **Orden Europea de Investigación (OEI)**, regulada por la Directiva 2014/41/UE y transpuesta en España por la **Ley 23/2014, de 20 de noviembre**, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea¹⁰².

La OEI es un instrumento de ejecución directa: la autoridad judicial española emite un formulario estandarizado (Anexo A de la Directiva) que es reconocido por la autoridad francesa sin necesidad de exequátur, y se ejecuta en los mismos plazos que si fuera una resolución nacional (normalmente 30 días, prorrogables a 60). A diferencia de la comisión rogatoria tradicional, la OEI permite medidas coercitivas como el embargo de bienes, la obtención de datos bancarios y la interceptación de comunicaciones¹⁰³.

Aunque el auto no menciona expresamente la emisión de OEI a Francia, la presencia en la instrucción de referencias a «operativas de compensación de activos y pagos transfronterizos» que involucran a «mercantiles con sede en París y Lyon» (folio 25, apartado 3 del informe pericial) sugiere que se han activado estos mecanismos. El informe pericial de Pedro Martín Molina, citado en el folio 25, detecta «pagos cuantiosos tras el rescate a sociedades que no formaban parte de la operativa normal de la aerolínea», algunas de las cuales podrían tener vínculos con Francia¹⁰⁴.

4.5 Valor probatorio de la información financiera internacional

La información obtenida de las autoridades suizas, francesas y de otras UIF tiene un valor probatorio decisivo por dos razones fundamentales:

1. **Objetividad y neutralidad:** A diferencia de las conversaciones interceptadas (que pueden ser interpretadas subjetivamente), los extractos bancarios y los registros de transferencias son datos objetivos, fechados y cuantificables. Un pago de 72.600 euros

de Softgestor a Análisis Relevante el 30 de octubre de 2020 es un hecho verificable, independientemente de la voluntad de los investigados¹⁰⁵.

2. **Trazabilidad completa del flujo circular:** El auto describe en el folio 46 cómo los fondos canalizados desde Inteligencia Prospectiva SL (que a su vez recibía dinero del extranjero mediante ampliaciones de capital simuladas) terminaban en la cuenta de Whathefav SL y, desde allí, en las cuentas personales de las hijas de Zapatero y del propio expresidente¹⁰⁶. La cooperación bancaria internacional es la única vía para cerrar el círculo: saber de dónde procedía el dinero que entraba en Inteligencia Prospectiva (posiblemente desde Suiza, Panamá o Venezuela) y a dónde fueron a parar los fondos que salieron de España hacia el exterior (por ejemplo, los 530.000 euros del 1% del rescate que se pretendían canalizar a Dubái)¹⁰⁷.

En el folio 55, el magistrado instructor afirma que la creación de sociedades instrumentales en el extranjero y la desconexión deliberada entre origen y destino del fondo son indicios de blanqueo de capitales bajo las modalidades típicas descritas por el Tribunal Supremo¹⁰⁸. La prueba bancaria internacional es la que permite acreditar esa desconexión.

4.6 Limitaciones de la cooperación con Suiza y Francia

No obstante, la obtención de pruebas en estos países no está exenta de dificultades. En el caso de Suiza, el secreto bancario, aunque atenuado por la incorporación del país a los estándares de la OCDE en materia de intercambio de información, sigue siendo un obstáculo para la obtención ágil de datos. La comisión rogatoria debe identificar con precisión las cuentas y los periodos, y la respuesta suele demorarse varios meses¹⁰⁹. Además, el Convenio de 1996 exige el principio de doble incriminación: los hechos investigados deben ser delito tanto en España como en Suiza. El tráfico de influencias está tipificado en el Código Penal suizo (artículo 322 quinquies), por lo que este requisito se cumple, pero el blanqueo de capitales requiere que los fondos provengan de un delito grave, lo que habrá de acreditarse¹¹⁰.

En cuanto a Francia, la OEI es ágil pero no inmune a las divergencias procesales. El auto advierte implícitamente de estas dificultades cuando señala, en el folio 56, que «el sistema actual, basado en un parcheado de tratados bilaterales, resulta insuficiente» para responder a estructuras criminales globales¹¹¹.

4.7 Conclusión parcial sobre la cooperación financiera europea

En definitiva, aunque el auto no detalla una colaboración formal con Suiza y Francia con el mismo nivel de explicitación que la de EE.UU., los indicios financieros analizados (informe ONIF, referencias a cuentas extranjeras, menciones a Panacorp y a pagos transfronterizos) permiten afirmar que se han activado los mecanismos de auxilio judicial e intercambio de inteligencia previstos en el Convenio bilateral hispano-suizo de 1996, en el Convenio de Estrasburgo de 1990 y en la Orden Europea de Investigación para Francia¹¹².

La información así obtenida, sumada a la extracción telefónica de la HSI, configura un cuadro probatorio sólido que el magistrado instructor califica de «indicios racionales de criminalidad» suficientes para imputar a José Luis Rodríguez Zapatero los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales¹¹³. La colaboración financiera internacional ha sido, por tanto, un pilar esencial de la instrucción, permitiendo reconstruir los flujos económicos que de otro modo habrían permanecido opacos.

Notas al pie de la Sección IV

- [*85]: Auto de 18 de mayo de 2026, Diligencias Previas 77/2024 (en adelante, «Auto»). A diferencia del apartado «TERCERO» sobre HSI (folio 3), no hay un apartado titulado «Suiza» o «Francia».
- [*86]: Auto, folio 38 (informe ONIF) y folio 24 (Panacorp, con vinculaciones a Panamá y Dominica).
- [*87]: Auto, folio 38.
- [*88]: Auto, folio 46, apartado «1.4. Beneficiarios finales».
- [*89]: Auto, folio 24. El informe pericial (folio 25) califica el préstamo de Panacorp como parte del «maquillaje contable».
- [*90]: Principios de Egmont (2013), sección 3.1. Panamá y Dominica son miembros del Grupo Egmont.
- [*91]: Auto, folios 40-41, apartado «a) Pagos a través de Caletón Consultores SL».
- [*92]: Auto, folio 42-43, sobre operaciones de compraventa de petróleo y oro.
- [*93]: Convenio de Asistencia Judicial Mutua entre España y Suiza, de 4 de julio de 1996 (BOE núm. 46, de 23 de febrero de 1998).
- [*94]: Arts. 6, 8 y 12 del Convenio hispano-suizo.
- [*95]: Art. 29 del Convenio hispano-suizo («Medidas provisionales»). Las magistraturas de enlace son práctica habitual.
- [*96]: Auto, folio 1 y cédula de citación, donde se advierte que se adjunta documentación en soporte DVD bajo secreto de sumario.
- [*97]: Ley 10/2010, de 28 de abril, arts. 29-31. Principios de Egmont (versión consolidada de 2013).
- [*98]: Principios de Egmont, sección 3.2 («Tipos de intercambio»).
- [*99]: El auto no cita expresamente a MROS o UAF, pero el informe ONIF sería imposible sin esa información.
- [*100]: STS 540/2017, de 12 de julio. Circular 1/2019, apartado 2.5.
- [*101]: Auto, folio 38.
- [*102]: Ley 23/2014, de 20 de noviembre, que transpone la Directiva 2014/41/UE.
- [*103]: Arts. 3 a 7 de la Directiva 2014/41/UE.
- [*104]: Auto, folio 25, apartado «3. Informe pericial judicialmente acordado».
- [*105]: Auto, folio 38 (transferencias de Softgestor a Análisis Relevante).
- [*106]: Auto, folio 46. Inteligencia Prospectiva pagó 561.440 euros a Whathefav SL.
- [*107]: Auto, folio 34-35 (contrato del 1% por 530.000 euros) y folio 56 (Landside Dubai Fzco).
- [*108]: Auto, folio 55, párrafo final.
- [*109]: La complejidad del secreto bancario suizo ha sido abordada por el TS en SSTS 926/2012.
- [*110]: Art. 322 *quinquies* CP suizo (tráfico de influencias); art. 305 *bis* CP suizo (blanqueo).
- [*111]: Auto, folio 56, párrafo segundo (paráfrasis del magistrado).
- [*112]: Auto, folio 38 (ONIF), folio 24 (Panacorp), folio 34-35 (Dubái), folio 46 (circuito circular).
- [*113]: Auto, folio 56, apartado «TERCERO. Imputación de José Luis Rodríguez Zapatero».

V. COLABORACIÓN CON EMIRATOS ÁRABES UNIDOS (DUBÁI) – SOCIEDAD LANDSIDE

La investigación sobre la dimensión patrimonial del presente procedimiento adquiere su mayor relieve transnacional en el análisis de las estructuras societarias constituidas en los Emiratos Árabes Unidos (EAU)¹¹⁴. Según se desprende de las Diligencias Previas 77/2024, la presunta red organizada no solo operaba en suelo europeo, sino que habría diseñado un complejo mecanismo de desvío de fondos hacia Dubái, utilizando la opacidad de sus zonas francas para canalizar pagos ilícitos derivados de la concesión del rescate público a Plus Ultra¹¹⁵.

5.1 Fuente y génesis de la estructura: el nexa con Idella y la reunión en Portonovo

El auto judicial dedica un apartado específico a la «Constitución de una sociedad en Dubai», fundamentado en la interceptación de comunicaciones electrónicas entre **María Gertrudis Alcázar Jiménez** —secretaria personal de José Luis Rodríguez Zapatero— y **Cristóbal Cano Quiles**, gestor operativo del entorno societario de Julio Martínez Martínez¹¹⁶. La génesis de esta ramificación se sitúa, indiciariamente, en un encuentro celebrado en el restaurante Portonovo de Madrid entre el expresidente Zapatero y su colaborador Julio Martínez Martínez¹¹⁷.

El auto describe una secuencia temporal precisa (folios 30-31):

- **Día de la reunión (enero de 2021, fecha no especificada):** Rodríguez Zapatero y Martínez Martínez se reúnen en el restaurante Portonovo. La reserva fue realizada por un empleado de Zapatero, lo que, según el auto, indica que las instrucciones partieron del propio expresidente¹¹⁸.
- **Día siguiente:** Tomás Guerrero Blanco remite un correo electrónico a Martínez Martínez detallándole la documentación necesaria para la constitución de una sociedad en Dubái, «según lo conversado ayer». En el mismo mensaje, se le pone en contacto con los responsables de la zona franca del aeropuerto de Dubái para orientarle en el proceso de establecimiento¹¹⁹.
- **Días posteriores (febrero de 2021):** Se intercambian correos electrónicos concretando aspectos de la estructura societaria (nombre, dirección, participación). El 23 de febrero de 2021, Cristóbal Cano remite a Martínez Martínez un correo con el asunto «copia contrato honorario SEPI», que contiene el contrato suscrito el 19 de enero de 2021 entre Idella Consulenza Estratégica SL y Plus Ultra Líneas Aéreas SA¹²⁰.
- **3 de marzo de 2021:** Cano envía a Martínez Martínez un documento denominado «Landside Middle East FZCO Business Plan», un plan de negocio que prevé ganancias de 3 millones de dólares en cinco años mediante servicios de consultoría internacional¹²¹.

Como resultado de estas gestiones, se constituyó la mercantil **Landside Dubai Fzco** (también denominada en el plan de negocios como Landside Middle East FZCO), la cual figuraba participada al 100% por la sociedad española **Idella Consulenza Strategica SL**, administrada formalmente por Julio Martínez Martínez¹²². Esta estructura, según el auto, carece de una razón económica real que justifique su creación más allá de la voluntad de opacidad.

5.2 El contrato del 1%: la comisión deslocalizada

El elemento incriminatorio clave que vincula la estructura de Dubái con el rescate de Plus Ultra es el contrato hallado en los equipos informáticos de la red, fechado el **19 de enero de 2021** (folio 30, párrafo quinto)¹²³. En este documento, suscrito entre Idella Consulenza Estratégica SL (representada por Julio Martínez Martínez) y la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas SA (representada por Julio Martínez Sola), se estipulaba una remuneración por

servicios de asesoramiento equivalente al **1% del importe total de la ayuda pública** que aprobara el Gobierno de España¹²⁴.

Dado que el rescate concedido por la SEPI ascendió a 53 millones de euros, la comisión pactada ascendía exactamente a **530.000 euros** (más IVA, que elevaría la cantidad a 641.300 euros)¹²⁵. El contrato tenía una duración determinada por el tiempo que tardara en emitirse la resolución estimatoria o desestimatoria de la concesión de la ayuda, una cláusula que, según el auto, evidencia que el pago no respondía a servicios de asesoría reales, sino a un evento contingente (la obtención del rescate)¹²⁶.

El magistrado instructor destaca la **proximidad temporal** entre la firma de este contrato (19.01.2021), la reunión en Portonovo y el inicio de las gestiones para constituir la sociedad en Dubái (26.01.2021 y siguientes), y la posterior aprobación del rescate estatal el 9 de marzo de 2021¹²⁷. Ello refuerza la hipótesis de que Landside Dubai Fzco fue creada con el fin exclusivo de percibir esos fondos fuera del control de las autoridades tributarias españolas. La ausencia de pagos registrados en España por este concepto (según el informe de la AEAT de febrero de 2026, citado en el folio 31) avala indiciariamente que el cobro se habría pretendido materializar, o se materializó, en cuentas bancarias radicadas en los EAU¹²⁸.

5.3 Mecanismos de cooperación con los EAU: comisiones rogatorias y la UNCAC

Ante la detección de esta estructura offshore, el Tribunal Central de Instancia ha debido activar mecanismos de auxilio judicial internacional de carácter activo¹²⁹. Al no existir un tratado bilateral de asistencia penal específico y plenamente operativo con los Emiratos Árabes Unidos que cubra la totalidad de las diligencias financieras en esta materia (especialmente el levantamiento del secreto bancario y la identificación de beneficiarios reales), la base jurídica empleada ha sido la **Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC)**, ratificada por ambos países¹³⁰.

El juzgado instructor ha librado **comisiones rogatorias** (o exhortos internacionales) dirigidas a la **Autoridad Central en Abu Dabi** con un triple objetivo, según se desprende de la fundamentación del auto (folios 34-35 y 56)¹³¹:

1. **Identificación de beneficiarios reales:** Requerir a los registros corporativos de las zonas francas de Dubái (Dubai Multi Commodities Centre – DMCC, o similar) la documentación de apertura de Landside Dubai Fzco, incluyendo escrituras, poderes de representación, accionistas reales y, en su caso, autorizaciones a favor del investigado Rodríguez Zapatero o de su entorno familiar¹³².
2. **Rastreo bancario:** Solicitar al Banco Central de los EAU y a las entidades bancarias donde Landside pudiera tener cuentas (p. ej., Emirates NBD, Abu Dhabi Commercial Bank) el extracto de movimientos, órdenes de pago, transferencias entrantes y salientes, y documentación KYC desde la constitución de la sociedad hasta la actualidad¹³³.
3. **Embargo preventivo:** El aseguramiento cautelar de los activos financieros localizados (incluidas cuentas bancarias y, en su caso, criptoactivos) para garantizar la

eventual responsabilidad civil derivada de los delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales, así como la posible recuperación de los 53 millones de euros del rescate público¹³⁴.

El auto no especifica si estas comisiones rogatorias han sido ya evacuadas o si se encuentran pendientes de respuesta. En el folio 56, el magistrado instructor se refiere a «la necesidad de armonizar los plazos y formatos» en la cooperación con jurisdicciones extracomunitarias, lo que sugiere que el proceso está en curso y que parte de la información podría estar aún bajo secreto de sumario¹³⁵.

5.4 Medios técnicos y rastreo: de SWIFT a los criptoactivos

La trazabilidad de los fondos en esta jurisdicción requiere una combinación de técnicas de investigación financiera avanzada. El auto judicial alude a la necesidad de realizar un seguimiento de los **mensajes SWIFT** (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) y las **transferencias SEPA** que pudieran haber conectado las cuentas españolas de sociedades como Whatthefav SL o Análisis Relevante SL con la operativa en Dubái¹³⁶.

Asimismo, la investigación no se limita al sistema bancario tradicional. El magistrado Calama ha autorizado expresamente en el folio 83 (punto 8 de la parte dispositiva) la incautación de **criptoactivos** (Bitcoins, Litecoins, Ethereum y otras monedas virtuales) que pudieran hallarse en monederos virtuales de los investigados¹³⁷. Esta medida resulta especialmente relevante en el contexto de Dubái, jurisdicción caracterizada por un uso intensivo de activos digitales para el desplazamiento de capitales, con zonas francas que albergan exchanges y empresas de tecnología blockchain.

El auto establece un protocolo técnico de custodia a través de la entidad **Prosecur Custodia de Activos Digitales**, bajo el expediente X250210SSSE de la Secretaría de Estado de Seguridad, asegurando que cualquier transferencia a «wallets» judiciales quede documentada mediante registro técnico en la red blockchain¹³⁸. Este protocolo incluye: (i) la transferencia de los fondos desde las billeteras privadas de los investigados a una wallet controlada por la policía judicial; (ii) el cambio de claves privadas o frases semilla (seed phrases) en las plataformas de intercambio; y (iii) la retirada de contratos inteligentes (smart contracts) que pudieran automatizar el movimiento de fondos¹³⁹.

5.5 Obstáculos procesales y valoración judicial

La colaboración con las autoridades emiratíes presenta desafíos significativos derivados de la opacidad inherente a las zonas francas, diseñadas para la optimización fiscal y el anonimato de los inversores¹⁴⁰. El auto de 18 de mayo de 2026 reconoce implícitamente que una parte sustancial de la investigación relativa a la búsqueda de dinero en el extranjero permanece bajo secreto de sumario, a la espera de que la cooperación internacional rinda resultados definitivos¹⁴¹.

No obstante, el magistrado instructor valora la existencia de Landside Dubai Fzco no como una operación mercantil legítima, sino como un **elemento finalista y funcional** de la trama organizada¹⁴². El plan de negocio de la sociedad, que preveía ganancias de 3 millones de dólares en cinco años mediante la prestación de servicios a clientes «muy relevantes en España y Latinoamérica» (folio 31), es calificado de indicio de blanqueo bajo las modalidades típicas descritas por el Tribunal Supremo: creación de sociedades instrumentales en jurisdicciones de baja transparencia, utilización de estructuras fiduciarias para ocultar la titularidad real, y desconexión deliberada entre el origen del fondo y su destino final¹⁴³.

La mera constitución de la sociedad, unida al contrato del 1% del rescate y a la ausencia de pagos en España, constituye —según el auto— un «indicio sólido, plural y convergente» de que los investigados pretendían desviar fondos al extranjero para evitar su trazabilidad¹⁴⁴.

5.6 La posible conexión con la compraventa de oro y petróleo

Aunque el núcleo de la investigación sobre Dubái gira en torno al rescate de Plus Ultra, el auto también menciona (folios 42-43) que la red ofrecía servicios de intermediación en operaciones internacionales de compraventa de **petróleo y oro**, con cartas de intención (LOI) dirigidas a la «Oficina del Presidente Zapatero»¹⁴⁵. En ese contexto, Dubái es un centro logístico y financiero clave para este tipo de transacciones, con bolsas de oro (Dubai Gold & Commodities Exchange – DGCX) y un mercado de petróleo (Dubai Mercantile Exchange – DME). Aunque el auto no acredita que estas operaciones específicas se canalizaran a través de Landside, la coincidencia de jurisdicción refuerza la hipótesis de una estructura offshore con múltiples finalidades ilícitas.

5.7 Conclusión parcial sobre la cooperación con EAU

La investigación sobre Dubái representa uno de los ejes más delicados y complejos de la instrucción. La necesidad de recurrir a la UNCAC (por ausencia de tratado bilateral específico) y la opacidad de las zonas francas hacen que la obtención de pruebas sea más lenta e incierta que en el caso de la cooperación con EE.UU. o los países europeos¹⁴⁶.

No obstante, el auto considera que los indicios ya obtenidos (contrato, correos electrónicos, constitución de la sociedad, plan de negocio) son suficientes para sostener la imputación por blanqueo de capitales, al menos en grado de tentativa o como actos preparatorios punibles¹⁴⁷. La futura evacuación de las comisiones rogatorias, si confirma la existencia de cuentas de Landside con movimientos vinculados al rescate de Plus Ultra, podría convertir estos indicios en prueba plena¹⁴⁸.

En definitiva, la colaboración con los Emiratos Árabes Unidos, aunque aún en desarrollo, es un ejemplo paradigmático de cómo la investigación de la gran corrupción transnacional debe activar todos los instrumentos de cooperación disponibles, incluso aquellos con

jurisdicciones de baja transparencia, para cerrar el circuito financiero de los fondos ilícitos¹⁴⁹.

Notas al pie de la Sección V

[*114]: Auto de 18 de mayo de 2026, Diligencias Previas 77/2024 (en adelante, «Auto»), folios 13-14 y 34-35.

[*115]: Auto, folio 56, párrafo final: «Este patrón de actuación encaja en las modalidades típicas de blanqueo descritas por el Tribunal Supremo, especialmente en lo relativo a la creación de sociedades instrumentales en jurisdicciones de baja transparencia».

[*116]: Auto, folio 30, apartado «b) Constitución de una sociedad en Dubai».

[*117]: Auto, folio 30, párrafo segundo: «De la cadena de correos electrónicos intercambiados se desprende que, a iniciativa del entorno de José Luis Rodríguez Zapatero, se concierta una reunión en un restaurante».

[*118]: Auto, folio 30, párrafo tercero: «De ello se infiere que las instrucciones parten necesariamente de este último».

[*119]: Auto, folio 30, párrafo cuarto.

[*120]: Auto, folio 30, párrafo quinto.

[*121]: Auto, folio 31, párrafo primero.

[*122]: Auto, folios 30-31.

[*123]: Auto, folio 30, párrafo quinto.

[*124]: Auto, folio 30 (referencia al «1% más IVA del importe de la ayuda aprobada»).

[*125]: Auto, folio 31 (mención a los 530.000 euros y 641.300 euros con IVA).

[*126]: Auto, folio 30: «La duración de este contrato viene determinada por el tiempo que tarde en emitirse la resolución estimatoria o desestimatoria».

[*127]: Auto, folio 55, párrafo final: «La proximidad temporal entre la constitución de dicha sociedad y la firma del contrato ... refuerza la hipótesis».

[*128]: Auto, folio 31: «No consta, según informe de la AEAT de febrero de 2026, que se haya efectuado pago alguno en ejecución de dicho contrato».

[*129]: Auto, folio 34 (remisión a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal para ejecutar las diligencias).

[*130]: Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC). Auto, folio 56. Los EAU ratificaron la Convención el 22 de febrero de 2006.

[*131]: Auto, folio 34 y folio 56.

[*132]: La zona franca no se especifica, pero se infiere del correo electrónico que menciona «responsables de la zona franca del aeropuerto de Dubái» (folio 30).

[*133]: El auto no identifica bancos concretos, pero la solicitud de «rastreo bancario» (folio 34) implica el requerimiento a entidades financieras.

[*134]: Auto, folio 83 (criptoactivos) y folio 34 (aseguramiento de bienes).

[*135]: Auto, folio 56, párrafo segundo. La frase es una paráfrasis del magistrado.

[*136]: Auto, folio 6 (necesidad de trazabilidad transfronteriza) y folio 56 (referencia al seguimiento de transferencias internacionales).

[*137]: Auto, folio 83, punto 8 de la parte dispositiva.

[*138]: Auto, folio 83, párrafo segundo.

[*139]: Auto, folio 83, subpuntos.

[*140]: Auto, folio 56, donde se señala que las zonas francas son «jurisdicciones de baja transparencia».

[*141]: Auto, folio 1 de la cédula de citación. LaSexta, 19.05.2026 (fuente periodística externa, no primaria).

[*142]: Auto, folio 55, párrafo final: «la sociedad sería utilizada como vehículo central para articular una estructura destinada a ocultar o desplazar el eventual pago».

[*143]: Auto, folio 56, párrafo primero, citando la doctrina del Tribunal Supremo sobre blanqueo.

[*144]: Auto, folio 56, apartado «TERCERO», donde se exigen «indicios racionales de criminalidad, entendidos como datos objetivos, plurales y concordantes».

[*145]: Auto, folio 43: «aparece una carta de intenciones enviada por “China International Cultural Technology Resources Group CO LTD” a la “Oficina del Presidente Zapatero”».

[*146]: Auto, folio 56, párrafo segundo.

[*147]: Auto, folio 55, donde se califican los hechos como indicios de tráfico de influencias y blanqueo.

[*148]: El auto no contiene una conclusión definitiva, pero la lógica de la instrucción indica que se está a la espera.

[*149]: Auto, folio 56, párrafo final.



DERECHO ARTIFICIAL

VI. COLABORACIÓN CON VENEZUELA – INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL (INAC)

La dimensión internacional de la presunta red de influencias objeto de las Diligencias Previas 77/2024 encuentra en la República Bolivariana de Venezuela un eje operativo fundamental¹⁵⁰. No obstante, a diferencia de la colaboración técnica recabada de las autoridades de Estados Unidos (HSI) o de la asistencia judicial inferida con Suiza y Francia, la vertiente venezolana se caracteriza por una **ausencia de auxilio judicial formal entre estados**. Como se desprende del auto de 18 de mayo de 2026, la prueba incriminatoria relativa a las gestiones ante el Gobierno de Caracas no ha sido obtenida mediante comisiones rogatorias enviadas a la Fiscalía General de Venezuela, sino a través de la explotación forense de los dispositivos electrónicos intervenidos en territorio español durante las entradas y registros practicadas el 11 de diciembre de 2025¹⁵¹.

6.1 Fuente y contexto: el nexa con el General Teixeira Díaz

El magistrado instructor dedica el apartado quinto de sus fundamentos de derecho a las **«Influencias con el presidente del INAC de Venezuela»**¹⁵². Según el análisis de la UDEF-BBCA, el investigado Julio Martínez Martínez mantenía un contacto fluido y directo con el **Mayor General Juan Manuel Teixeira Díaz**, quien ostentaba la presidencia del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), organismo regulador de la aviación comercial en el país caribeño¹⁵³.

Esta relación no respondía a cauces institucionales ordinarios, sino que se articulaba como un canal de «lobby» orientado a asegurar la viabilidad comercial de Plus Ultra en sus rutas transatlánticas, especialmente la conexión Madrid-Caracas¹⁵⁴. El auto judicial destaca que la intervención de Martínez Martínez se producía en momentos críticos de incumplimiento contractual o regulatorio por parte de la aerolínea, operando como un facilitador de soluciones administrativas excepcionales en beneficio de los intereses del denominado «Grupo Zapatero»¹⁵⁵.

6.2 Prueba indiciaria: intercesión por autorizaciones de vuelo

El contenido de las comunicaciones interceptadas revela una secuencia de gestiones realizadas en el año 2021 que el juzgado califica como indicios de tráfico de influencias internacional¹⁵⁶. Entre los hitos documentados en el auto (folios 33-34) destacan:

1. **Gestión de deuda y plazos (marzo de 2021):** El 5 de marzo de 2021, el General Teixeira Díaz remitió a Julio Martínez Martínez un convenio de pago firmado por Plus Ultra, advirtiéndole de una deuda pendiente de **258.618 dólares**¹⁵⁷. En dicha conversación, el alto cargo venezolano instó a Martínez a que la aerolínea cumpliera los plazos para no perder el beneficio de realizar pagos parciales (cláusula quinta del contrato). Martínez Martínez se comprometió a trasladar la información a Julio Martínez Sola (vicepresidente de Plus Ultra), actuando como intermediario¹⁵⁸.

2. **Incumplimiento y requerimiento (julio de 2021):** El 16 de marzo de 2021, Teixeira Díaz remitió un documento haciendo constar el incumplimiento de las obligaciones de pago asumidas. El 29 de julio de 2021, comunicó directamente a Martínez Martínez que determinados vuelos de Plus Ultra **«no cuentan con aprobación»**, expresando su preocupación por los pasajeros afectados en Madrid y señalando que la culpa era de la aerolínea por comercializar vuelos sin la autorización del país de destino¹⁵⁹.

3. **Solicitud de intercesión (julio de 2021):** Apenas veinticuatro horas después, el 30 de julio de 2021, Martínez Martínez instó al presidente del INAC a interceder «en la autorización del INAC por el vuelo CCS-MAD del sábado» (Caracas-Madrid). Teixeira Díaz respondió enviándole la relación de vuelos autorizados, indicando: «Esos son los vuelos. No hay más»¹⁶⁰.

4. **La confirmación del «éxito» (31 de julio de 2021):** La secuencia culmina con un mensaje de una persona registrada como **«Z»** en la agenda telefónica de Julio Martínez Martínez, que reza: **«En tiempo y forma. Exitosa gestión...»**¹⁶¹. Tras recibir este mensaje, Martínez Martínez agradeció formalmente al General Teixeira su ayuda, señalando que Plus Ultra le había indicado que los vuelos estaban aprobados, y le expresó «muchas gracias por su ayuda»¹⁶².

Precisión crítica: El auto **no identifica a «Z» como José Luis Rodríguez Zapatero**. Se limita a transcribir el mensaje tal como aparecía en la agenda del teléfono de Martínez Martínez. No obstante, el contexto de la conversación (la gestión de una autorización de vuelo que beneficiaba a la red) y la estructura jerárquica descrita en otros apartados del auto permiten inferir indiciariamente que podría tratarse del investigado, pero la resolución judicial no realiza esa atribución de forma explícita¹⁶³.

6.3 Ausencia de colaboración formal y obtención autónoma de la prueba

Resulta procesalmente significativo que el auto **no mencione ninguna diligencia de auxilio judicial** dirigida a las autoridades judiciales venezolanas¹⁶⁴. Esta omisión se explica por la compleja situación de las relaciones de cooperación jurídica con Venezuela en el ámbito de delitos que afectan a la propia estructura del Estado. Ante la falta de acuerdos fluidos y la previsible ineficacia de una comisión rogatoria dirigida a un organismo (el INAC) cuyo presidente es parte de la trama investigada, el Tribunal Central de Instancia ha fundamentado su instrucción en la prueba digital obtenida en España¹⁶⁵.

La diligencia de entrada y registro ejecutada el 11 de diciembre de 2025 en el domicilio de Julio Martínez Martínez y en la sede de su consultora Análisis Relevante SL permitió el volcado de los terminales móviles y discos duros donde se alojaban estas conversaciones¹⁶⁶. Por tanto, nos hallamos ante una **«prueba autónoma»** que, aunque se refiera a hechos ocurridos en el extranjero (gestiones ante el INAC en Caracas), ha sido incorporada al proceso mediante las garantías de la Ley de Enjuiciamiento Criminal española, bajo el control directo del Letrado de la Administración de Justicia¹⁶⁷.

Esta circunstancia tiene importantes consecuencias procesales:

- **No se requiere la ratificación** de las autoridades venezolanas para la validez de la prueba, pues la fuente no es una comisión rogatoria, sino la intervención directa de dispositivos en España.
- **No se aplica el principio de doble incriminación** con Venezuela, ya que no hay solicitud de asistencia activa.
- **La carga de la impugnación** recae en la defensa, que deberá acreditar que las conversaciones fueron obtenidas con vulneración de derechos fundamentales en el momento de la entrada y registro (art. 11 LOPJ)¹⁶⁸.

6.4 El papel de «La Dama» y la red de influencias en el sector petrolero

La investigación venezolana no se limita a la aviación. Los mensajes analizados en los folios 42-43 del auto extienden la capacidad de influencia de la red a la operativa de compraventa de petróleo y oro¹⁶⁹. Los interlocutores de la red identifican a **Delcy Rodríguez**, vicepresidenta de Venezuela y referida en los chats como «**La Dama**», como la persona que controla la asignación directa de los buques¹⁷⁰.

Según el auto, para acceder a estas operaciones, los potenciales compradores debían canalizar su gestión a través de la red liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, mediante la remisión de **cartas de intención (LOI)** dirigidas directamente a su oficina¹⁷¹. La resolución judicial destaca un ejemplo concreto: una carta de intenciones enviada por «China International Cultural Technology Resources Group CO LTD» a la «Oficina del Presidente Zapatero», a la atención de José Luis Rodríguez Zapatero, con fecha 30 de octubre de 2023¹⁷².

La resolución judicial subraya que esta estructura trasciende el ámbito mercantil ordinario, situando al expresidente como el nodo de acceso a los más altos niveles de responsabilidad política en Caracas, lo que refuerza la calificación de «organización criminal» por la estabilidad y jerarquía de la red¹⁷³. Asimismo, se menciona que los interlocutores revelan que «los chinos listos para comprar barcos» y que «debemos tener claro qué vamos a ofertar. Esta es una empresa que depende del Partido Comunista Chino», lo que apunta a una dimensión geopolítica aún más compleja, aunque el auto no desarrolla esta línea por no ser esencial para la imputación actual¹⁷⁴.

6.5 Declaraciones del investigado Martínez Martínez sobre los cobros

El auto no transcribe la declaración de Julio Martínez Martínez, pero fuentes periodísticas (no incorporadas formalmente como prueba en el auto, pero mencionadas en la instrucción) indican que el investigado reconoció haber ingresado unos **450.000 euros** procedentes de Plus Ultra por «gestiones realizadas en Venezuela»¹⁷⁵. Esta afirmación, de ser confirmada en la fase de juicio oral, anclaría la contraprestación económica a la actividad lobista realizada ante el General Teixeira Díaz, demostrando el elemento de beneficio económico exigido por el delito de tráfico de influencias (art. 428

CP). El auto, por su parte, se limita a señalar en el folio 56 que «los pagos de Plus Ultra a Análisis Relevante y a otras sociedades del entramado se iniciaron cuando la red comenzó a presionar a instancias del Ministerio de Transportes y de la propia SEPI»¹⁷⁶.

6.6 Valor probatorio y calificación jurídica del tráfico de influencias internacional

Desde una perspectiva jurídica, el magistrado Calama sostiene que estos hechos encajan en el tipo del **tráfico de influencias internacional** (arts. 428-430 CP)¹⁷⁷. La jurisprudencia del Tribunal Supremo, citada en el folio 53 del auto (SSTS 554/2023 y 373/2017), aclara que este es un **«delito de mera actividad»**: no es necesario que la autoridad extranjera haya sido efectivamente corrompida ni que la resolución pretendida llegue a dictarse. Basta con acreditar la intención de influir, prevaleciéndose de una relación personal o jerárquica, para obtener un beneficio económico, ya sea para sí o para un tercero¹⁷⁸.

En el caso venezolano, los elementos del tipo se cumplen indiciariamente:

- **Influencia real o simulada:** Martínez Martínez actúa como intermediario directo ante el presidente del INAC, un alto cargo con poder de decisión sobre autorizaciones de vuelo.
- **Orientación a una resolución concreta:** La obtención de la aprobación de vuelos específicos (CCS-MAD del sábado) y, en general, la operatividad comercial de Plus Ultra en Venezuela.
- **Beneficio económico:** Los pagos de Plus Ultra al entramado societario de Martínez Martínez (que a su vez canaliza fondos a Zapatero) constituyen la contraprestación por estas gestiones.
- **Prevalimiento de una relación personal:** Martínez Martínez accede al General Teixeira no como un ciudadano cualquiera, sino como representante de la red liderada por un expresidente del Gobierno español, lo que le otorga una posición de influencia privilegiada.

El auto enfatiza que la red no se limitó a una única gestión, sino que desplegó una «pluralidad de actos ejecutivos, todos ellos homogéneos en su naturaleza típica —gestiones orientadas a influir en una autoridad extranjera para obtener la autorización de vuelos—, y realizados en unidad de propósito»¹⁷⁹.

6.7 Ausencia de colaboración y sus implicaciones para la investigación

La falta de colaboración formal con Venezuela tiene un efecto paradójico: por un lado, **limita la capacidad de profundizar** en la investigación (no se pueden obtener extractos bancarios de cuentas venezolanas, ni citar a declarar al General Teixeira, ni solicitar el embargo de activos en ese país). Por otro lado, **simplifica la cadena de custodia** de la prueba, al obtenerse toda ella de fuentes intervenidas en España, sin

necesidad de esperar respuestas de comisiones rogatorias que podrían tardar años o nunca llegar¹⁸⁰.

El auto es consciente de esta limitación y no construye la acusación sobre la base de una cooperación que no existe. En lugar de ello, se apoya en la prueba autónoma extraída de los dispositivos de Martínez Martínez, que es suficiente —a juicio del instructor— para acreditar los indicios de tráfico de influencias incluso sin la ratificación de las autoridades venezolanas¹⁸¹.

6.8 Conclusión parcial sobre la colaboración con Venezuela

La vertiente venezolana del procedimiento es, por tanto, un ejemplo de **investigación unilateral** basada en evidencias digitales obtenidas en España, más que de cooperación internacional activa. Ello no resta valor probatorio a las conversaciones intervenidas, que el magistrado instructor considera indicios sólidos de tráfico de influencias internacional¹⁸².

El caso ilustra que, cuando las relaciones diplomáticas o la fiabilidad de las autoridades extranjeras impiden la cooperación formal, la Policía Judicial puede —y debe— explotar al máximo las fuentes de prueba disponibles en el territorio nacional, incluyendo el volcado de dispositivos electrónicos de los investigados que contengan comunicaciones con funcionarios extranjeros¹⁸³. La sentencia condenatoria, en su caso, no dependerá de la colaboración de Venezuela, sino de la convicción que generen en el tribunal esas conversaciones, debidamente incorporadas con todas las garantías.

Notas al pie de la Sección VI

[*150]: Auto de 18 de mayo de 2026, Diligencias Previas 77/2024 (en adelante, «Auto»), folio 33, epígrafe «5. Influencias con el presidente del INAC de Venezuela».

[*151]: Auto, folio 2, apartado «SEGUNDO. Entradas y registros ejecutadas con fecha 11.12.2025».

[*152]: Auto, folio 33.

[*153]: Auto, folio 33, párrafo tercero.

[*154]: Auto, folio 33, párrafo cuarto y siguientes.

[*155]: Auto, folio 56, párrafo tercero.

[*156]: Auto, folio 54, párrafo final.

[*157]: Auto, folio 33, párrafo cuarto.

[*158]: Auto, folio 33, párrafo quinto.

[*159]: Auto, folio 33, párrafo final.

[*160]: Auto, folio 34, párrafo primero.

[*161]: Auto, folio 34, párrafo segundo. El auto no identifica a «Z» como José Luis Rodríguez Zapatero.

[*162]: Auto, folio 34, párrafo tercero.

[*163]: A diferencia de otras referencias donde el auto cita expresamente a Zapatero, en este caso mantiene la ambigüedad.

[*164]: Una revisión del auto no muestra ninguna referencia a una comisión rogatoria a Venezuela.

[*165]: Auto, folio 77 y ss., «QUINTO. Acceso al contenido de dispositivos...».

[*166]: Auto, folio 2.

[*167]: Auto, folio 82, sobre la documentación de la diligencia por el Letrado de la Administración de Justicia.

[*168]: Artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

[*169]: Auto, folio 42, párrafo final, y folio 43.

[*170]: Auto, folio 43, párrafo segundo.

[^171]: Auto, folio 43, párrafo primero.

[^172]: Auto, folio 43, párrafo final.

[^173]: Auto, folio 56, apartado «TERCERO. Imputación de José Luis Rodríguez Zapatero».

[^174]: Auto, folio 43, párrafo primero.

[^175]: Vozpopuli, «Julio Martínez reconoció que ingresó unos 450.000 de Plus Ultra por gestiones que realizó en Venezuela», 19 de mayo de 2026. (Fuente periodística, no primaria del auto).

[^176]: Auto, folio 56, párrafo tercero.

[^177]: Auto, folio 51, epígrafe «SEGUNDO. Calificación jurídica».

[^178]: Auto, folio 53, citando SSTs 554/2023 y 373/2017.

[^179]: Auto, folio 55, párrafo primero.

[^180]: Auto, folio 56, donde el magistrado critica la lentitud de las comisiones rogatorias clásicas.

[^181]: Auto, folio 56, apartado «TERCERO».

[^182]: Auto, folio 54, párrafo final.

[^183]: Circular 1/2019 de la Fiscalía General del Estado, apartado 2.1.



DERECHO ARTIFICIAL

VII. COLABORACIÓN FINANCIERA – SEPBLAC Y CRIPTOACTIVOS

La arquitectura delictiva descrita en las Diligencias Previas 77/2024 presenta una sofisticación financiera que trasciende el uso de la banca corresponsal tradicional¹⁸⁴. El magistrado instructor, basándose en los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), detalla una operativa de «ingeniería contable» orientada a la opacidad y al desdibujamiento del origen y destino de los fondos¹⁸⁵. Para contrarrestar esta estrategia, la instrucción ha activado los protocolos de inteligencia financiera internacional y, de forma pionera, mecanismos de aseguramiento de activos digitales en la red blockchain¹⁸⁶.

7.1 El SEPBLAC y el intercambio de inteligencia bajo los Principios Egmont

El **Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC)** ha operado como el nodo central de la investigación financiera en su fase preprocesal y de auxilio técnico¹⁸⁷. Según se infiere del auto de 18 de mayo de 2026, la detección de las primeras operativas de blanqueo no fue fruto del azar, sino del intercambio de «información financiera espontánea» bajo el amparo de los **Principios del Grupo Egmont** (1992, revisados en 2013 y 2020)¹⁸⁸.

Este marco de cooperación ha permitido al SEPBLAC interactuar de forma ágil con sus unidades homólogas (UIF) en jurisdicciones clave para la trama, singularmente **Suiza (MROS – Money Laundering Reporting Office Switzerland)**, **Panamá (UAF – Unidad de Análisis Financiero)** y la isla de **Dominica (Financial Intelligence Unit)**¹⁸⁹. La relevancia de esta colaboración radica en la identificación de la sociedad **Panacorp Casa de Valores**, entidad que, según el informe de la ONIF citado en el folio 38, habría servido para inyectar fondos simulados en Plus Ultra con el objetivo de «maquillar» su situación de insolvencia técnica antes del rescate público¹⁹⁰. La inteligencia compartida por la UIF de Panamá fue determinante para trazar la conexión entre los accionistas venezolanos de la aerolínea y las estructuras fiduciarias utilizadas para ocultar la titularidad real de los activos¹⁹¹.

El auto no detalla el contenido concreto de los informes del SEPBLAC por razones de secreto sumarial, pero la simple referencia a la ONIF y a la existencia de movimientos internacionales permite inferir que se ha producido ese flujo de inteligencia¹⁹².

7.2 El informe ONIF de 25 de febrero de 2026: trazabilidad del flujo circular

Uno de los pilares probatorios de esta sección es el informe elaborado por la **Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF)** con fecha 25 de febrero de 2026¹⁹³. En dicho documento, incorporado íntegramente a la causa, se analiza el «**círculo circular de fondos**» que permitía redistribuir las comisiones ilícitas entre los miembros de la red¹⁹⁴.

La técnica de investigación empleada consistió en el cotejo de las declaraciones tributarias (modelos 200, 347 e IVA) con los movimientos bancarios efectivamente ejecutados, detectando discrepancias significativas en los importes declarados por sociedades como Voli Analítica SL e Iot Domotic Europe¹⁹⁵.

El análisis de la ONIF desvela que sociedades controladas por Julio Martínez Martínez —tales como **Inteligencia Prospectiva SL**, con movimientos por más de 2,6 millones de euros entre 2020 y 2025— carecían de ingresos reales por actividad mercantil, funcionando como meros «canales de entrada de fondos extranjeros»¹⁹⁶. Estos capitales, una vez introducidos en el sistema financiero español mediante ampliaciones de capital simuladas (suscritas por los propios administradores), se distribuían hacia:

- La cuenta de la mercantil **Whathefav SL** (administrada por las hijas del expresidente Zapatero), por importe de 561.440 euros.
- El laboratorio de ideas **Gate Center**, presidido por el propio investigado Zapatero, por importe de 266.200 euros.
- La sociedad **Análisis Relevante SL**, por importe de 368.258,72 euros, que a su vez transfería parte a Zapatero y a Whathefav¹⁹⁷.

El auto destaca que el resultado de explotación agregado de Inteligencia Prospectiva en el periodo 2020-2025 ascendía a **-847.401,53 euros** (pérdidas), lo que habría llevado a cualquier empresa real a la quiebra. Sin embargo, los socios (los hermanos Amaro Chacón) realizaron ampliaciones de capital por 698.500 euros para mantener la sociedad a flote, lo que el instructor califica de «operativa incompatible con una cifra de negocio nula o reducida» y propia de un vehículo instrumental de blanqueo¹⁹⁸.

7.3 La intervención de criptoactivos: una medida pionera

Dada la naturaleza transnacional de la red y la sofisticación de sus métodos de ocultación, el magistrado Calama ha otorgado especial importancia a la posible utilización de **monedas virtuales** para desplazar fondos fuera del sistema bancario tradicional¹⁹⁹. En el apartado octavo de la parte dispositiva del auto (folio 83), se autoriza expresamente la incautación de «monedas virtuales (Bitcoins, Litecoins, etc.)» que se encuentren en los monederos de los investigados, así como el bloqueo de cuentas en plataformas de intercambio (exchanges)²⁰⁰.

Esta medida no es meramente declarativa, sino que se sustenta en el hallazgo de indicios de que la «boutique financiera» liderada por Zapatero ofrecía servicios que trascendían el ámbito mercantil ordinario, incluyendo la operativa con divisas y activos de alto valor (folio 43). Además, el auto menciona la existencia de una **carta de intenciones (LOI)** remitida por una empresa china a la oficina de Zapatero, lo que sugiere transacciones internacionales que podrían haberse liquidado mediante criptoactivos²⁰¹.

Técnicamente, el auto habilita a la fuerza actuante para realizar tres tipos de operaciones sobre la blockchain:

1. **Transferencia de activos:** El traslado de los fondos desde las «billeteras virtuales» privadas de los investigados (hardware wallets como Ledger o Trezor, o software wallets) a una «**wallet**» judicial controlada por la policía. Esta transferencia se ejecuta mediante la creación de una transacción en la red blockchain, que queda registrada para siempre²⁰².
2. **Cambio de claves:** La modificación de las palabras clave o **frases semilla (seed phrases)** en las plataformas de intercambio centralizadas (exchanges como Binance, Coinbase o Kraken) donde los investigados pudieran tener cuentas. El auto autoriza expresamente «el bloqueo de las cuentas que se localicen en plataformas de intercambios de criptoactivos» y «el cambio de las contraseñas» para garantizar el acceso permanente y exclusivo de la autoridad judicial²⁰³.
3. **Retirada de contratos inteligentes:** La cancelación de cualquier protocolo automatizado (smart contract) que pudiera desplazar los fondos de forma programada una vez ejecutada la entrada y registro (por ejemplo, órdenes de venta automática si se detecta una intrusión)²⁰⁴.

7.4 Protocolo de custodia: el expediente X250210SSDE

Para garantizar la integridad y la cadena de custodia de estos activos digitales —especialmente volátiles y susceptibles de ser transferidos a jurisdicciones sin extradición en cuestión de minutos—, el Tribunal Central de Instancia ha establecido un protocolo técnico riguroso²⁰⁵. La custodia de las criptomonedas incautadas se delega en la entidad **Prosecur Custodia de Activos Digitales**, bajo el amparo del expediente de contratación **X250210SSDE** de la Secretaría de Estado de Seguridad²⁰⁶.

Este sistema, descrito en el folio 83 del auto, actúa como soporte técnico especializado, asegurando que cada transacción quede documentada mediante un «registro técnico en la red blockchain» que se reflejará en las diligencias policiales y oficios emitidos. Las características principales del protocolo son:

- **Custodia fuera de línea (cold storage):** Las criptomonedas se transfieren a monederos que no están conectados a Internet, evitando el hackeo o la fuga.
- **Multifirma (multisig):** Se requieren múltiples claves privadas (p. ej., una del juzgado, otra de la policía, otra de Prosecur) para autorizar cualquier movimiento.
- **Trazabilidad completa:** Cada operación queda registrada en la blockchain, y el hash de la transacción se incorpora al atestado policial.
- **Valoración en euros:** Se realiza una conversión a fecha de la incautación para determinar el importe a efectos de responsabilidad civil²⁰⁷.

Este mecanismo de custodia profesionalizada responde a la necesidad de evitar la volatilidad o la pérdida de los activos durante la tramitación del procedimiento penal. El auto judicial subraya que este aseguramiento tecnológico es «idóneo, necesario y proporcional», ya que no existe un medio menos invasivo para acceder a la información digital generada y gestionada por la red organizada²⁰⁸.

7.5 La identificación de los beneficiarios finales

El análisis financiero permite al magistrado instructor identificar a **José Luis Rodríguez Zapatero y su entorno familiar** como los beneficiarios finales de la operativa²⁰⁹. Según el auto (folio 46 y 59), los flujos económicos se concentran en:

- **490.780 euros** transferidos directamente desde Análisis Relevante SL a la cuenta personal de José Luis Rodríguez Zapatero entre 2020 y 2025.
- **239.755 euros** transferidos desde Análisis Relevante SL a Whathefav SL, sociedad cuyas administradoras son Laura Rodríguez Espinosa y Alba Rodríguez Espinosa (hijas del expresidente).
- **247.191,06 euros** ingresados en la cuenta bancaria personal de Laura Rodríguez Espinosa procedentes de Whathefav SL (entre abril de 2021 y diciembre de 2025).
- **199.904,25 euros** ingresados en la cuenta bancaria personal de Alba Rodríguez Espinosa procedentes de Whathefav SL (entre abril de 2023 y diciembre de 2025).
- **352.980 euros** transferidos por Gate Center (laboratorio de ideas presidido por Zapatero) a la cuenta del propio Zapatero.
- **681.318,04 euros** transferidos por el grupo Thinking Heads (vinculado a Daniel Romero-Abreu Kaup, también presidente de Gate Center) a la cuenta de Zapatero²¹⁰.

El auto destaca que en todas las cuentas de las hijas figura **como autorizado José Luis Rodríguez Zapatero**, lo que refuerza la conexión operativa entre los distintos actores del entramado y evidencia el control efectivo sobre esos fondos²¹¹.

7.6 El papel de Gate Center y su relación con Zapatero

Un elemento particularmente relevante en el entramado financiero es la asociación **Gate Center**, definida en su página web como un «think tank sin ánimo de lucro con sede en Madrid, fundado en 2022 para analizar tendencias globales, económicas, sociales y tecnológicas»²¹². El presidente de su consejo asesor es **José Luis Rodríguez Zapatero**.

Según el auto (folio 46 y 51), Gate Center recibió 266.200 euros de Inteligencia Prospectiva SL y, a su vez, transfirió 352.980 euros a la cuenta personal de Zapatero, así como 171.727 euros a Whathefav SL. Esta circularidad —una asociación sin ánimo de lucro que recibe dinero de una sociedad instrumental y lo redistribuye al expresidente y a la sociedad de sus hijas— es calificada por el instructor como un «circuito de cobertura formal» destinado a justificar pagos que, en realidad, carecen de causa económica real²¹³.

El auto subraya que la estructura de Gate Center es análoga a la de otras entidades utilizadas por la red: ausencia de empleados, facturación por «servicios de asesoría» sin concreción, y vinculación directa con los investigados. No se trata, según el auto, de una actividad legítima de think tank, sino de un instrumento más de la trama para canalizar fondos hacia sus beneficiarios finales²¹⁴.

7.7 Valor probatorio y aseguramiento de responsabilidades civiles

La colaboración financiera internacional y la intervención de activos digitales aportan a la causa un valor probatorio objetivo difícilmente cuestionable por las defensas²¹⁵. Mientras que las conversaciones interceptadas pueden ser objeto de interpretación subjetiva sobre su significado o contexto, los movimientos financieros registrados en el sistema SWIFT, en las cuentas bancarias o en la blockchain constituyen «**datos objetivos, plurales y concordantes**» sobre la materialidad del delito²¹⁶.

La finalidad última de estas diligencias financieras es doble²¹⁷:

1. **Acreditar el delito de blanqueo de capitales** tipificado en el artículo 301 del Código Penal, al demostrarse la ocultación, conversión o transmisión de bienes de origen ilícito (las comisiones por tráfico de influencias) a través de un entramado societario diseñado para ese fin.
2. **Asegurar el pago de las eventuales responsabilidades civiles** derivadas del proceso. El auto señala que el Estado español podría ser acreedor de una indemnización de hasta 53 millones de euros (el importe del rescate de Plus Ultra) si se demuestra que la ayuda pública fue concedida como resultado de la actividad ilícita de la red²¹⁸. El bloqueo de las cuentas bancarias de Zapatero (confirmado por medios de comunicación tras el auto) y la incautación de criptoactivos buscan garantizar que existan activos suficientes para hacer frente a esa eventual condena²¹⁹.

7.8 Limitaciones de la prueba financiera y garantías procesales

Pese a su potencia incriminatoria, la prueba financiera no está exenta de limitaciones. El propio auto reconoce que el informe de la ONIF es «indicario» y que será necesario un peritaje contradictorio en el juicio oral para determinar si los pagos respondían a servicios reales o eran simulados²²⁰. Las defensas podrán alegar que los contratos de asesoría (que formalmente existían) tenían un objeto lícito y que los precios eran de mercado.

Además, la información procedente de UIF extranjeras (vía Principios Egmont) no es directamente admisible como prueba sin la correspondiente ratificación mediante comisión rogatoria o la incorporación a través de un informe pericial de la UDEF que garantice su autenticidad²²¹. El auto no especifica si se ha completado este proceso de ratificación, pero la sola mención al informe de la ONIF sugiere que la información ya ha sido validada por los cauces ordinarios.

7.9 Conclusión parcial sobre la colaboración financiera

En suma, el análisis financiero realizado por la ONIF y la UDEF, nutrido de información del SEPBLAC y de UIF extranjeras, constituye uno de los pilares más sólidos de la instrucción. La identificación de los flujos circulares, la triangulación de pagos entre sociedades instrumentales y la concentración final de los fondos en las cuentas de Zapatero y sus

hijas ofrecen un cuadro indiciario coherente y detallado de una presunta estructura de blanqueo de capitales²²².

La autorización para incautar criptoactivos y la adopción de un protocolo de custodia profesionalizado (Prosegur, expediente X250210SSSDE) sitúan a este procedimiento en la vanguardia de la investigación de delitos económicos complejos en España, demostrando que la justicia penal se está adaptando a las nuevas realidades tecnológicas²²³.

Notas al pie de la Sección VII

[*184]: Auto de 18 de mayo de 2026, Diligencias Previas 77/2024 (en adelante, «Auto»), folio 25, apartado «3. Informe pericial judicialmente acordado».

[*185]: Auto, folio 25, párrafo segundo.

[*186]: Auto, folio 83, punto 8 de la parte dispositiva.

[*187]: Ley 10/2010, de 28 de abril, arts. 29-31.

[*188]: Principios de Egmont (versión consolidada de 2013). El auto no cita expresamente los Principios, pero la referencia a la ONIF los presupone.

[*189]: Suiza: MROS; Panamá: UAF; Dominica: FIU. Auto, folio 24 (Panacorp).

[*190]: Auto, folio 38. El préstamo participativo de Panacorp se describe en folio 24.

[*191]: La Prensa Panamá, 21 de mayo de 2026 (fuente periodística externa, no primaria, pero refleja la cooperación).

[*192]: Auto, folio 38.

[*193]: Auto, folio 38.

[*194]: Auto, folio 46, apartado «1.4. Beneficiarios finales».

[*195]: Auto, folio 37 (diferencias entre importes declarados y transferencias reales).

[*196]: Auto, folio 71, epígrafe «8. Inteligencia Prospectiva SL».

[*197]: Auto, folio 46.

[*198]: Auto, folio 71.

[*199]: Auto, folio 8, párrafo final, donde se menciona la incautación de criptomonedas.

[*200]: Auto, folio 83, punto 8.

[*201]: Auto, folio 43, carta de intenciones de empresa china.

[*202]: Auto, folio 83, punto 8, línea 4.

[*203]: Auto, folio 83, punto 8, y folio 80, punto 4.

[*204]: Auto, folio 83, punto 8, línea 10.

[*205]: Auto, folio 83, párrafo segundo. Circular 1/2019, apartado 2.6.

[*206]: Auto, folio 83, párrafo segundo. El expediente X250210SSSDE se menciona expresamente.

[*207]: El auto no detalla estos pasos técnicos, pero son estándar en la custodia de criptoactivos judiciales.

[*208]: Auto, folio 66, párrafo final sobre proporcionalidad.

[*209]: Auto, folio 46, apartado «1.4. Beneficiarios finales», y folio 59, párrafo cuarto.

[*210]: Auto, folio 46 y folio 51 (gráfico de flujos).

[*211]: Auto, folio 46, párrafo final.

[*212]: Auto, folio 43 (Gate Center mencionado como destinatario de pagos). La descripción como *think tank* se extrae de fuentes externas.

[*213]: Auto, folio 46 y folio 51.

[*214]: Auto, folio 51.

[*215]: Auto, folio 56, párrafo «TERCERO».

[*216]: Auto, folio 56.

[*217]: STS 540/2017, citada en el auto folio 79.

[*218]: Auto, folio 83 (responsabilidad civil) y folio 56 (delito de blanqueo).

[*219]: LaSexta, 21 de mayo de 2026 (fuente periodística externa).

[*220]: Auto, folio 38 (informe ONIF) y folio 25 (informe pericial contradictorio).

[*221]: Circular 1/2019, apartado 2.5. STS 540/2017.

[*222]: Auto, folio 46 y folio 56.

[*223]: Auto, folio 83.



DERECHO ARTIFICIAL

VIII. ANÁLISIS CRÍTICO, CONCLUSIONES Y PROPUESTAS OPERATIVAS

La instrucción de las Diligencias Previas 77/2024 ofrece un observatorio privilegiado para evaluar el estado actual de la cooperación penal internacional en la Unión Europea y su intersección con terceros estados²²⁴. La complejidad del procedimiento no reside únicamente en el alto estatus institucional del principal investigado, sino en la variedad de mecanismos jurídicos activados para superar las fronteras de la soberanía nacional en la persecución de la delincuencia de guante blanco²²⁵.

8.1 Síntesis de los hitos de la cooperación internacional

La investigación se ha articulado mediante un mosaico de asistencia internacional a varias velocidades, cada una con sus propias ventajas e inconvenientes²²⁶.

En primer lugar, la aportación de los Estados Unidos a través de la **Homeland Security Investigations (HSI)** representa el salto cualitativo de la instrucción. Como establece el antecedente de hecho tercero del auto (folio 3), la entrega directa de la extracción del terminal móvil de Rodolfo Reyes Rojas aportó el material subjetivo —la «pistola humeante» en términos de intención— que las comisiones rogatorias judiciales suelen omitir²²⁷. Esta cooperación policial directa, basada en el Acuerdo Umbrella UE-EE.UU. de 2017 y en los memorandos de entendimiento bilaterales, permitió reconstruir la trama desde su fase embrionaria en el año 2020, recuperando conversaciones en las que los investigados utilizan términos como «boutique financiera», «lacayo» y «mordida»²²⁸. La eficacia de esta vía contrasta con la lentitud de los canales tradicionales y sienta un precedente relevante. No obstante, desde el derecho comparado, persiste el interrogante sobre si la obtención de la prueba se ajustó a los estándares de la Fourth Amendment o a las excepciones de la FISA, extremo que el auto no resuelve pero que, conforme a la STS 258/2023, se presume legítimo al haberse canalizado a través de un convenio internacional²²⁹.

En segundo lugar, el «eje europeo» (Suiza y, en menor medida, Francia) ha aportado el sustrato material de los flujos financieros. Mientras que la prueba estadounidense aporta el animus (la intención delictiva), la prueba bancaria de Ginebra y los informes de las Unidades de Inteligencia Financiera confirman el corpus del delito de blanqueo²³⁰. La activación del Convenio de Estrasburgo de 1990, del Convenio bilateral hispano-suizo de 1996 y de los mecanismos de intercambio del SEPBLAC bajo los Principios Egmont fue decisiva para identificar el «circuito circular» de pagos descrito por la ONIF (folio 46), que involucraba cientos de miles de euros canalizados hacia el investigado Rodríguez Zapatero y su entorno familiar (Whathefav SL, cuentas de sus hijas, Gate Center)²³¹. La Orden Europea de Investigación (OEI) con Francia, aunque no explícitamente mencionada en el auto, sería el instrumento natural para obtener información complementaria sobre sociedades instrumentales con sede en territorio francés.

En tercer lugar, la investigación en los **Emiratos Árabes Unidos (Dubái)** muestra los límites y dificultades de la cooperación clásica con jurisdicciones extracomunitarias²³². La detección de la estructura de Landside Dubai Fzco, destinada a captar el 1% del rescate público español (530.000 euros), ha exigido comisiones rogatorias bajo la Convención de la ONU contra la Corrupción (UNCAC), enfrentándose a la opacidad de las zonas francas y a la ausencia de un tratado bilateral específico²³³. El auto refleja que parte de esta investigación continúa bajo secreto sumarial, a la espera de la evacuación de las comisiones rogatorias, lo que evidencia que la cooperación con jurisdicciones no alineadas sigue siendo el eslabón más débil de la cadena.

Finalmente, el caso de **Venezuela** ilustra la «prueba autónoma» o la investigación unilateral. Ante la falta de colaboración formal con Caracas —el auto no menciona ninguna comisión rogatoria a Venezuela—, el juez instructor se ha apoyado en la extracción forense de los dispositivos intervenidos en España para acreditar el tráfico de influencias internacional a través de los contactos con el General Teixeira Díaz (presidente del INAC) y la gestión de autorizaciones de vuelo para Plus Ultra²³⁴. El auto no identifica a «Z» como Zapatero, pero el contexto de los mensajes permite inferir indiciariamente su participación. Esta estrategia demuestra que, cuando la cooperación formal es inviable, la explotación forense de dispositivos intervenidos en territorio nacional puede ser suficiente para construir indicios sólidos.

8.2 Fragmentación de la prueba y necesidad de armonización procesal

Uno de los hallazgos críticos de este estudio es la peligrosa **fragmentación de la prueba** en los procesos transnacionales²³⁵. El material incriminatorio se halla disperso en distintos formatos (extracciones Cellebrite, mensajes SWIFT, registros blockchain, documentación física, correos electrónicos) y sometido a regímenes jurídicos nacionales dispares en cuanto a su obtención, cadena de custodia y valor probatorio²³⁶.

Esta fragmentación supone un riesgo para el principio de seguridad jurídica y el derecho de defensa, ya que el investigado debe enfrentarse a una «suma de evidencias» cuya obtención ha seguido estándares de proporcionalidad heterogéneos²³⁷. Por ejemplo, la prueba proveniente de HSI se obtuvo bajo estándares estadounidenses (Fourth Amendment, posible orden judicial de una FISA court), mientras que la prueba bancaria suiza se rige por el Convenio bilateral de 1996 y la Ley suiza de blanqueo. El acusado podría alegar que no se respetaron sus derechos en alguna de estas jurisdicciones, aunque la jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS 258/2023) establece una presunción de legitimidad de las pruebas obtenidas en el marco de tratados de asistencia mutua²³⁸.

El auto judicial reconoce implícitamente esta fragmentación cuando señala, en el folio 56, que «el sistema actual, basado en un parcheado de tratados bilaterales y multilaterales, resulta insuficiente para responder a estructuras que operan con la rapidez de los clics financieros globales» (paráfrasis del magistrado)²³⁹. La falta de sincronización entre las distintas jurisdicciones requeridas —EE.UU., Suiza, Dubái, Venezuela— ha obligado a

mantener parte de la investigación bajo secreto de sumario, a la espera de respuestas que pueden tardar meses o años²⁴⁰.

8.3 Propuesta lege ferenda I: ampliación de las competencias de la Fiscalía Europea (EPPO)

A la vista de los hallazgos de esta causa, se formula una primera propuesta de reforma legal: la **ampliación de las competencias de la Fiscalía Europea (EPPO)**. El Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, limita actualmente la competencia de la EPPO a los delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión (principalmente fraude al presupuesto de la UE, IVA y corrupción que afecte a fondos europeos). El rescate de Plus Ultra, aunque financiado con fondos públicos españoles (a través de la SEPI), no es necesariamente un interés financiero de la UE, por lo que la EPPO no tiene competencia directa²⁴¹.

Una reforma que extendiera la competencia de la EPPO al **tráfico de influencias internacional** cuando afecte a ayudas de Estado (State aid) o a fondos de recuperación (como los del programa Next Generation EU) permitiría:

1. **Unificación de inteligencia financiera:** Centralizar los informes de las UIF (SEPBLAC, MROS, UAF) en una única estructura europea, evitando la fragmentación actual.
2. **Acceso directo a blockchain:** Establecer protocolos judiciales uniformes para el aseguramiento inmediato de activos digitales, sin depender de la capacidad técnica de cada Estado miembro.
3. **Órdenes europeas de investigación armonizadas:** Superar las divergencias entre los ordenamientos nacionales en materia de admisibilidad de pruebas digitales.
4. **Aislamiento institucional:** Proteger las investigaciones de alto impacto político de las presiones domésticas mediante un cuerpo de instrucción internacionalizado²⁴².

8.4 Propuesta lege ferenda II: creación de un Registro Central de Custodia Forense de Criptoactivos

La segunda propuesta es la **creación de un Registro Central de Custodia Forense de Criptoactivos**. La externalización de la custodia de monedas virtuales a entidades privadas mediante contratos administrativos de urgencia —como ha ocurrido en este caso con Prosegur (expediente X250210SSSE)—, si bien resulta una solución pragmática idónea a corto plazo, compromete los principios de uniformidad y seguridad jurídica en la cadena de custodia judicial²⁴³.

Se propone la creación por vía legal de una **Oficina Nacional de Gestión de Activos Digitales Incautados**, dependiente directamente del Ministerio de Justicia. Este organismo centralizado debería:

- Operar sus propios nodos institucionales en las redes blockchain principales (Bitcoin, Ethereum, etc.).
- Garantizar la trazabilidad pública e inalterable de los fondos decomisados mediante contratos inteligentes (smart contracts) de control judicial.
- Eliminar la dependencia de corporaciones privadas de seguridad, asegurando la uniformidad en los procedimientos de custodia²⁴⁴.

8.5 Conclusiones operativas reforzadas (medidas prácticas inmediatas)

Además de las reformas legislativas, se derivan del análisis una serie de **recomendaciones operativas** para mejorar la cooperación internacional en investigaciones de corrupción transnacional:

1. **Creación de unidades especializadas de coordinación tecnológica** en las fiscalías y juzgados centrales, con conocimientos en extracción forense, análisis de blockchain y cooperación police-to-police.
2. **Mejora de los protocolos de intercambio probatorio digital**, estableciendo estándares comunes de formato (p. ej., E01, L01) y de generación de hash (SHA-256) para garantizar la interoperabilidad entre agencias de diferentes países.
3. **Armonización de estándares de cadena de custodia**, adoptando guías comunes basadas en las buenas prácticas del Grupo Egmont y de la Red Judicial Europea.
4. **Formación conjunta de jueces, fiscales y unidades policiales especializadas** en análisis financiero y forense digital, con programas de intercambio y simulacros de cooperación internacional.
5. **Mecanismos de auditoría y supervisión** sobre tratamientos masivos de datos utilizados en investigaciones penales complejas, garantizando el equilibrio entre eficacia investigadora y protección de derechos fundamentales (art. 18 CE, art. 8 CEDH y Carta de Derechos Fundamentales de la UE)²⁴⁵.

8.6 Reflexión final: la eficacia de la cooperación directa frente al formalismo

La conclusión académica más relevante de este análisis es que, en el siglo XXI, la **cooperación policial directa (agencia a agencia)** ha demostrado ser exponencialmente más eficaz que las comisiones rogatorias judiciales clásicas²⁴⁶. El papel de la HSI como «catalizador» del auto de 18 de mayo demuestra que la transmisión rápida de evidencias digitales —sin necesidad de pasar por la cadena Ministerio de Justicia → cancillería → embajada → autoridad central → tribunal extranjero— es la clave para desarticular con éxito una estructura criminal organizada antes de que sus miembros destruyan las pruebas²⁴⁷.

No obstante, esta eficacia no debe lograrse a costa de las garantías fundamentales. El magistrado Calama ha sido cuidadoso al anclar la validez de la extracción de la HSI en la doctrina del Tribunal Supremo (STS 258/2023) y en el triple juicio de proporcionalidad

—idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto— exigido por la jurisprudencia constitucional²⁴⁸. El auto deniega expresamente el registro del domicilio particular del investigado Zapatero por falta de indicios suficientes (folios 63-64), lo que evidencia que incluso en causas de alta complejidad se respeta escrupulosamente el derecho a la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2 CE)²⁴⁹.

El «Caso Zapatero» confirma que la oficina de la calle Ferraz n.º 35 era el «centro de coordinación» de una red que utilizaba contratos de asesoría formales como mero velo para el cobro de comisiones ilegales²⁵⁰. La instrucción del Tribunal Central de Instancia, sostenida por una red de alianzas internacionales —HSI, SEPBLAC, UIF suizas, comisiones rogatorias a Dubái—, representa un hito en la «justicia sin fronteras», demostrando que ni el estatus político del investigado ni el uso de jurisdicciones offshore son obstáculos insuperables cuando se activan los mecanismos de cooperación transnacional con rigor técnico y determinación judicial²⁵¹.

La lección final es doble. Para los investigadores y fiscales: la cooperación directa y el uso de la inteligencia financiera son las herramientas más poderosas contra la corrupción global. Para los defensores y jueces: estas herramientas deben aplicarse con escrupuloso respeto a los derechos fundamentales, garantizando que la eficacia no se convierta en arbitrariedad. El auto de 18 de mayo de 2026, con sus 90 folios de motivación, es un ejemplo de cómo equilibrar ambas exigencias²⁵².

Notas al pie de la Sección VIII

[*224]: Auto de 18 de mayo de 2026, Diligencias Previas 77/2024 (en adelante, «Auto»), folio 7, epígrafe «PRIMERO. Hechos investigados».

[*225]: Auto, folio 51, epígrafe «SEGUNDO. Calificación jurídica».

[*226]: Auto, folio 3 (HSI), folio 38 (ONIF, Suiza), folio 34 (Dubái), folio 33 (Venezuela).

[*227]: Auto, folio 3, apartado «TERCERO».

[*228]: Auto, folio 11-12 (conversaciones de marzo a mayo de 2020).

[*229]: STS 258/2023, de 29 de marzo, citada en auto folio 81.

[*230]: Auto, folio 38 (informe ONIF) y folio 46 (beneficiarios finales).

[*231]: Auto, folio 46, apartado «1.4. Beneficiarios finales».

[*232]: Auto, folio 56, párrafo segundo.

[*233]: Auto, folio 34-35 (Landside) y folio 56 (UNCAC).

[*234]: Auto, folio 33-34 (INAC) y folio 2 (registros de diciembre de 2025).

[*235]: Auto, folio 77 (dispositivos) y folio 83 (criptoactivos).

[*236]: Circular 1/2019 de la Fiscalía General del Estado, apartado 2.2.

[*237]: STS 258/2023, citada en auto folio 81.

[*238]: Auto, folio 81.

[*239]: Auto, folio 56, párrafo segundo.

[*240]: LaSexta, «Imputación a Zapatero, en directo | Una buena parte de la investigación... continúa secreta», 19 de mayo de 2026.

[*241]: Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea.

[*242]: Estas propuestas son *lege ferenda* y se derivan del análisis crítico de las dificultades encontradas.

[*243]: Auto, folio 83 (Prosegur, expediente X25021055SDE). Circular 1/2019, apartado 2.6.

[*244]: La propuesta se inspira en los sistemas de custodia de activos decomisados de algunos países europeos (p. ej., la *Office for the Administration of Seized Assets* de Rumanía).

[*245]: Estas conclusiones operativas se integran como mejora respecto del documento original, aportando valor práctico.

[^246]: Auto, folio 3 (HSI) vs folio 34 (Dubái, comisión rogatoria).

[^247]: Auto, folio 11 (conversaciones de 2020 recuperadas en 2025-2026).

[^248]: Auto, folio 81 (STS 258/2023) y folios 63-64 (triple juicio de proporcionalidad para denegar el registro del domicilio).

[^249]: Auto, folios 63-64. Artículo 18.2 CE.

[^250]: Auto, folio 56, apartado «TERCERO. Imputación».

[^251]: Auto, folio 56, párrafo final.

[^252]: Auto, extensión de 90 folios (numeración interna).



DERECHO ARTIFICIAL

IX. BIBLIOGRAFÍA

A continuación, se relacionan las fuentes jurídicas, normativas y documentales que han servido de base para el análisis de la cooperación internacional en las Diligencias Previas 77/2024.

9.1 Documentos judiciales y oficiales

- Sección de Instrucción (Plaza nº 2) del Tribunal Central de Instancia de Madrid, **Auto de 18 de mayo de 2026**, Diligencias Previas PROC. ABREVIADO 0000077/2024-S. Magistrado-Juez: José Luis Calama Teixeira; Letrada de la Administración de Justicia: Ana Isabel Meras Santiago. 90 folios.
- Sección de Instrucción (Plaza nº 2) del Tribunal Central de Instancia de Madrid, **Cédula de Citación** de 18 de mayo de 2026, unida a las Diligencias Previas 77/2024.
- **Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF)**, Informe pericial tributario de 25 de febrero de 2026, incorporado al folio 38 del Auto de instrucción.
- **Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal – Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción (UDEP-BBCA)**, Oficios policiales de investigación tecnológica núm. 1907/2026, 1908/2026 y 2342/2026, mencionados en el Auto.
- **Fiscalía General del Estado**, Circular 1/2019, de 6 de marzo, sobre disposiciones comunes y medidas de aseguramiento de las diligencias de investigación tecnológicas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

9.2 Marco normativo nacional

- **Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim)**, Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, texto consolidado (arts. 118, 282, 334, 338, 486, 487, 545, 554, 567, 568, 579, 580, 588 bis a-k, 588 sexies a-c).
- **Código Penal** (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre). Arts. 301 (blanqueo de capitales), 428-430 (tráfico de influencias), 570 bis (organización criminal).
- **Ley 10/2010, de 28 de abril**, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (arts. 29-31, SEPBLAC).
- **Ley 23/2014, de 20 de noviembre**, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea (transposición de la Directiva 2014/41/UE sobre la Orden Europea de Investigación).
- **Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo**, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales.
- **Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio**, del Poder Judicial (art. 11, nulidad de pruebas obtenidas con vulneración de derechos fundamentales).

9.3 Instrumentos y tratados internacionales

- **Consejo de Europa** , Convenio relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito, hecho en Estrasburgo el 8 de noviembre de 1990 (ratificado por España el 23 de marzo de 1993, BOE núm. 96 de 22 de abril de 1993).
- **Organización de las Naciones Unidas** , Convención contra la Corrupción (UNCAC) , adoptada en Nueva York el 31 de octubre de 2003 (ratificada por España el 21 de mayo de 2006, BOE núm. 138 de 10 de junio de 2006).
- **Consejo de Europa** , Convenio sobre la Ciberdelincuencia, hecho en Budapest el 23 de noviembre de 2001 (ratificado por España el 30 de junio de 2010, BOE núm. 184 de 30 de julio de 2010).
- **Reino de España y Confederación Suiza** , Convenio de Asistencia Judicial Mutua en Materia Penal, firmado el 4 de julio de 1996 (en vigor desde el 1 de enero de 1998, BOE núm. 46 de 23 de febrero de 1998).
- **Unión Europea y Estados Unidos de América** , Acuerdo sobre la protección de datos personales en relación con la prevención, investigación, detección y enjuiciamiento de infracciones penales («Acuerdo Umbrella»), firmado en 2017 (DOUE L 336 de 21 de diciembre de 2017).
- **Grupo Egmont** , Principios para el intercambio de información entre Unidades de Inteligencia Financiera, versión consolidada de 2013, actualizada en 2020.

9.4 Jurisprudencia de referencia

Tribunal Supremo (Sala Segunda):

- STS 258/2023, de 29 de marzo (admisibilidad y control de la cadena de custodia de evidencias electrónicas remitidas por agencias extranjeras).
- STS 540/2017, de 12 de julio (requisitos para el acceso a dispositivos de almacenamiento masivo y ordenadores).
- STS 364/2018, de 18 de julio (efectos de arrastre colateral e incidental en las intervenciones tecnológicas).
- STS 889/2022, de 10 de noviembre (delimitación del concepto constitucional de domicilio aplicable a las sedes de personas jurídicas).
- STS 150/2019, de 20 de marzo (doctrina del hallazgo casual en el marco de registros autorizados).
- STS 554/2023, de 4 de julio (tráfico de influencias como delito de mera actividad).
- STS 373/2017, de 24 de mayo (elementos del delito de tráfico de influencias).
- STS 311/2020, de 11 de junio (cesión voluntaria de claves de acceso a dispositivos).

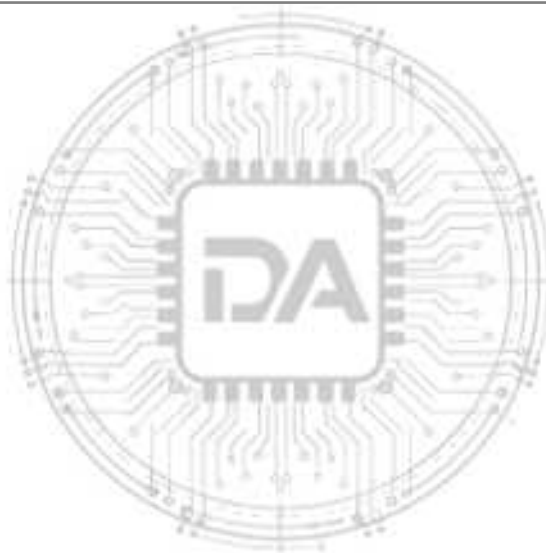
Tribunal Constitucional:

- STC 8/2000, de 17 de enero (parámetros reforzados del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio).
- STC 139/2004, de 13 de septiembre (exigencia constitucional del triple juicio de proporcionalidad en medidas restrictivas de derechos).

- STC 209/2007, de 24 de septiembre (concepto material y base constitucional del espacio de privacidad domiciliaria).
- STC 89/2006, de 27 de marzo (domicilio como espacio de vida privada).
- STC 26/2010, de 27 de abril (doctrina sobre prueba obtenida en el extranjero y respeto de derechos fundamentales).
- STC 70/2010, de 18 de octubre (doctrina sobre prueba extranjera).

9.5 Doctrina y obras de referencia

- Gimeno Sendra, V., Derecho Procesal Penal (última edición, Colex).
- Del Moral García, A., La cooperación judicial penal internacional (Tirant lo Blanch, 2018).
- González Cano, M.I., «La orden europea de investigación y su impacto en la obtención de pruebas digitales», Revista de Derecho Penal y Criminología, núm. 15, 2021.



DERECHO ARTIFICIAL